acceso 360

01/03/2021

Resumen de prensa del IEF

Instituto de la Empresa Familiar

REBOLD

ÍNDICE

EMPRESA FAMILIAR

Fecha	Titular/Medio	Pág.	Docs.
01/03/21	ENCUESTA DIRECTIVOS / El Nuevo Lunes -Aniversario	5	1

ECONOMÍA

Fecha	Titular/Medio	Pág.	Docs.
01/03/21	LA BANCA FACTURA UN 21% MENOS EN COMISIONES DE TARJETAS POR LA CRISIS / El Economista el Superlunes	7	1
01/03/21	LA CRISIS INDUSTRIAL FULMINA O AMENAZA 22.000 EMPLEOS / El Economista el Superlunes	8	1
01/03/21	ESCRIVÁ PROHIBIRÁ QUE LOS CONVENIOS IMPIDAN SEGUIR EN ACTIVO A LOS 67 AÑOS / El Economista el Superlunes	9	1
01/03/21	LAS CONSTRUCTORAS SE PREPARAN PARA CRECER EN REINO UNIDO TRAS EL 'BREXIT' / El Economista el Superlunes	10	1
01/03/21	EL 74% DEL PIB CATALÁN ESTÁ EN LA UCI TRAS UN AÑO DE PANDEMIA / El Economista el Superlunes	11	1
01/03/21	LA ECONOMÍA VASCA RECUPERARÁ TODO LO PERDIDO, COMO PRONTO, A FINAL DE 2022 / El Economista el Superlunes	12	1
01/03/21	DESÁNIMO LABORAL EN MÁXIMOS / El Mundo	13	1
01/03/21	EL GOBIERNO PRESIONA PARA QUE LAS AUTONOMÍAS DEN LAS AYUDAS DIRECTAS / El País	14	1
01/03/21	LAS EMPRESAS DEL IBEX MANTIENEN SU DEUDA A RAYA PESE A LA PANDEMIA / El País	15	1
01/03/21	EL COVID AGRAVA EL SUSPENSO ESPAÑOL EN LOS OBJETIVOS DE EMPLEO DE LA UE / El Periódico	16	1
01/03/21	EBULLICIÓN DE SALIDAS A BOLSA DE COMPAÑÍAS DE ENERGÍAS RENOVABLES / El Periódico	17	1
01/03/21	ENTREVISTA ÍÑIGO SAGARDOY PRESIDENTE DE SAGARDOY ABOGADOS "HAY UNA INSEGURIDAD JURÍDICA TOTAL EN TORNO A LA PROHIBICIÓN DE DESPEDIR" / Expansión	18	2
01/03/21	EL INDEFINIDO PAQUETE DE AYUDAS DE 11.000 MILLONES DE EUROS / Expansión	20	1
01/03/21	REINO UNIDO BUSCA 100.000 MILLONES PARA 'RESETEAR' SU ECONOMÍA ESTE AÑO / Expansión	21	1

ÍNDICE

ECONOMÍA

Fecha	Titular/Medio	Pág.	Docs.
01/03/21	11.000 MILLONES A CONDONAR CRÉDITOS Y AYUDAS DIRECTAS / La Razón	22	2
01/03/21	MÁS DE 150 ASOCIACIONES DE EMPRESAS EXIGEN EL FIN DE LOS ALTERCADOS / La Vanguardia	24	1
01/03/21	ENTREVISTA A JOSEPH STIGLITZ, NOBEL DE ECONOMÍA: "REACTIVARÁN LA ECONOMÍA DANDO DINERO A LOS POBRES, NO A LOS RICOS" / La Vanguardia	25	1

acceso 360

EMPRESA FAMILIAR

Instituto de la Empresa Familiar

REBOLD

el nuevo lunes
El Nuevo Lunes -Aniversario
España
01/03/21
Pr: Otra
Tirada: 50.000
Dif: 35.000
Cod: 137425539
Pagina: 2
Secc: SUMARIO Valor: 696,60 € Area (cm2): 109,1 Ocupac: 11,61 % Doc: 1/1 Autor: Num. Lec: 140000

Encuesta Directivos

Ángel Asensio, Presidente de la Confederación ModaEspaña; **Manuel Barbadillo Eyzaguirre,** Presidente Grupo Barbadillo; **Pablo Sáez,** director general de ACEX; **Javier Rodríguez Morales,** Director General de ACOGEN; **Victoria Plantalamor,** Presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM)**Fernando Morcillo Bernaldo de Quirós,** Presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS); **Elena Salgado,** Presidenta de la AEC; Javier Camy, Country Manager de AECOM España); **Jesús Martín,** Presidente de AFELIN y AELMA; **Óscar del Río,** Presidente de AFELMA, Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes; **Javier Romero de Córdoba,** Presidente de ASAGUA, Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua; **Ignacio García Magarzo,** Director general de ASEDAS; **Adolfo Jiménez,** Presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET); **Carlos Reinoso,** Director general de ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón); **Ángel Asensio,** Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid; **Javier González de Lara y Sarria,** Presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); **Santiago Aparicio,** Presidente de CEOE Castilla y León; **Ignacio Fernández-Cid,** Presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED); **Mª Luisa Álvarez Blanco,** Directora Gerente de Fedepesca; Jaime García-Calzada, Presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FEr); **Joan Torres,** Presidente de la Federacion Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF)**Pedro Fortea,** Director General de Mafex (Asociación Ferroviaria Española); **Álvaro García Barbero,** Presidente de la asociación gráfica Neobis; **Bruno Gutiérrez Cuevas,** Presidente de la Plataforma de Edificación Passivhaus; **Olga Martínez,** Presidenta Asociación Española del Dulce; **Gonzalo Martín,** Secretario general de Protermosolar; **Andrés Barceló,** Director General de UNESID; **Pedro Malla,** Director General de ALD Automotive en España; **Marta Blázquez,** Vicepresidenta Ejecutiva de Faconauto; **José Ignacio Goirigolzarri,** Presidente de Bankia; **Alicia Coronil,** Economista Jefe de Singular Bank; **Manuel Azuaga,** Presidente de Unicaja Banco; David Angulo, Chairman de Dunas Capital; **Tali Salomon,** Directora General de eToro para Iberia y Latinoamérica; **Concha Osácar,** Socia Fundadora de Azora; **Víctor García Brosa,** Presidente de OFICEMEN (Agrupación de Fabricantes de Cemento de España); **Jean-Luc Gardaz,** CEO de Saint-Gobain Países Mediterráneos; **Fernando Soto,** Director General de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía; Ignacio Osorio, CEO de Ampere Energy; **Antonio Llardén,** Presidente de Enagás; **Verónica Rivière,** Presidenta de GasINDUSTRIAL; **Iñigo Amoribieta,** CEO de Otovo; **Ernesto Macías,** Director General de SOLARWATT España; **María Luisa Huidobro,** Consejera delegada de Villar Mir Energía; **Daniel Camerero,** Vicepresidente de Astound Commerce para España y Portugal; **Joan Taulé,** Vicepresidente de Ventas para el Sur de Europa de CrowdStrike; **Carlos Tortosa,** Director de Canal y Grandes Cuentas de ESET España; **Ángeles Delgado,** Presidenta de Fujitsu; **Yannella Amendola,** Directora de Marketing de Hisense Iberia; **Luis Pardo,** CEO de Sage Iberia; **Rafael Brugnini,** Director General de SAP España; **Alberto Redondo,** Director de Marketing & Mass Market para Iberia y Latam de SERES; **Luis Santamaría,** Socio Cofundador de AdjudicacionesTIC; **Ramon Trias,** Presidente AIS-

el nuevo lunes
El Nuevo Lunes -Aniversario
España
01/03/21
Pr: Otra
Tirada: 50.000
Dif: 35.000
Cod: 137425555
Pagina: 54
Secc: POLÍTICA - ECO Valor: 6.000,00 € Area (cm2): 966,5 Ocupac: 100 % Doc: 1/16 Autor: Num. Lec: 140000

¿Qué propone usted para el mejor aprovechamiento de los fondos europeos? ¿Cree usted que se conseguirá aplicarlos para cambiar el modelo de la economía española?

ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Ángel Asensio, Presidente de la Confederación ModaEspaña

Ante una crisis de tal calibre debemos actuar en consecuencia. No solo nos estamos viendo afectados a nivel sanitario, sino también a nivel económico. Los fondos europeos, por tanto, deben servir para hacer frente a esta crisis coyuntural y llevar a cabo los cambios estructurales necesarios para salir adelante.

Antes de realizar dichas acciones, tenemos que plantearnos y observar cuál sería el porcentaje de la parte de inversión a fondo perdido. Así, las empresas podrán analizar y prever sus posibilidades para adaptarse a la situación, realizando los cambios necesarios y consiguiendo ser más competitivas.

Los retos a los que se enfrentan nuestras empresas y que, para mejorar, deben alcanzar son los siguientes:

- Fomentar la digitalización, para poder ser más eficientes y llegar a un mayor número de clientes.
- Encaminarse hacia la sostenibilidad, ya que el consumidor es cada vez más exigente en cuanto al cuidado del medio ambiente y se deben adoptar medidas más tajantes respecto a la responsabilidad empresarial para con el mundo que nos rodea.
- Aumentar el tamaño medio de la PYME española, para conseguir una mayor competitividad tanto a nivel nacional, como internacional.
- Implantar unos objetivos de internacionalización, para llevar la marca España más allá de nuestras fronteras, siendo un sinónimo de calidad y durabilidad.

Manuel Barbadillo Eyzaguirre, Presidente Grupo Barbadillo

El sector vitivinícola juega un papel muy importante en la economía de nuestro país. España cuenta con la mayor superficie de viñedo del mundo con 970.000 hectáreas, que representa casi el 15% del total.

El sector del vino es uno de los más golpeados por el cierre del canal de hoteles, restaurantes, bares y cafeterías, denominado sector Horeca, que es un apoyo sustancial a uno de los sectores que más aporta al PIB español,

como es el del Turismo. Otro elemento fundamental de la caída de ventas ha sido la supresión de las fiestas populares tan relevantes en España, ya que no se entiende nuestra cultura de celebración sin una unión intrínseca con el mundo del vino.

Actualmente, existen en España más de 4.000 bodegas que deben esforzarse por conseguir y aprovechar los fondos europeos. Nuestra bodega, que este año celebra 200 años elaborando vinos singulares, está presente en seis denominaciones de origen (DO) distintas y muy diferentes entre sí, pero que deben tener una finalidad común en el aprovechamiento de los fondos europeos. En este sentido, Bodegas Barbadillo establece dos prioridades: digitalización unida a conectividad y sostenibilidad.

La digitalización como uno de los pilares del futuro del sector del Vino, vinculada a la conectividad –fibra, 5G– que el entorno rural necesita, sobre todo en el proceso productivo, donde, de nuevo, la inversión en Innovación (I+D+i), combinada con la tradición en la elaboración de grandes vinos, deben ser elementos esenciales tanto en el viñedo como en bodega.

Pero también la digitalización orientada hacia el consumidor con plataformas para adaptarse al comercio electrónico. El canal de distribución del sector del vino ha cambiado con la llegada del e-commerce, que se ha potenciado de manera exponencial con la aparición de la pandemia, siendo una de las fuentes de crecimiento que han paliado un poco la enorme caída en Horeca, con más de 3M Hl.

La segunda pata de aprovechamiento de los recursos europeos debe ser la sostenibilidad. Europa está inmersa en un profundo cambio estratégico donde las nuevas políticas deberán ir dirigidas a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. La hoja de ruta incluye una serie de acciones destinadas a impulsar una Europa sin contaminación, un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y detener el cambio climático. Y aquí, todas las bodegas deberíamos adaptar los procesos y estrategias requeridas por la UE, no solo en transformar e incrementar nuestros viñedos y procesos ecológicos sino aprender de nuestros antepasados y volver a edificios bioclimáticos.

En el caso de Bodegas Barbadillo utilizamos las mismas bodegas ecológicas desde su fundación, edificios del s XVIII y S XIX. ¿Qué mejor que elaborar nuestros vinos en edificios que hace dos siglos fueron diseñados atendiendo a criterios de sostenibilidad, medioambientales y de ventilación y equilibrio térmico? Pues bien, consideramos que la inversión en tecnología no está reñida con métodos transmitidos de generación en generación y así apostar de manera decidida por una arquitectura bioclimática.

ASOCIACIONES

Pablo Sáez, director general de ACEX

Las carreteras soportan el 84% del transporte de mercancías y el 91% del transporte de personas. Han demostrado ser esenciales para mantener la movilidad y garantizar los traslados de los suministros sanitarios y de alimentación en situaciones extremas como el estado de alarma provocado por la Covid-19 o ante las consecuencias de una climatología adversa.

Desde ACEX esperábamos que la carretera y, en concreto, su conservación, ocupara un lugar relevante en el Fondo Europeo de recuperación económica. A nuestro pesar, no ha sido así. Bruselas ha puesto el foco sobre la digitalización del transporte y la economía sostenible, mientras que la infraestructura viaria no ha salido bien parada.

La movilidad por carretera es un factor esencial para el desarrollo social y económico del país y la vertebración del territorio. Por ello esta falta de apoyo económico es incomprensible. En caso de confirmarse que los fondos europeos no se aplicarán en la mejora de la conservación de nuestras vías, es primordial que el Estado destine, vía presupuestaria, recursos para solucionar la situación de las carreteras españolas, a la cola europea en inversión en conservación.

Debería dedicarse 1.300 millones de euros al año a la conservación de carreteras. Solo así podemos asegurar el correcto funcionamiento del sistema de transportes y estar en el orden de magnitud de los países del entorno.

Javier Rodríguez Morales, Director General de ACOGEN

Desde ACOGEN proponemos potenciar la industria como motor de recuperación, desarrollo, empleo y bienestar social. Los vectores para marcar la diferen-

cia en la reactivación industrial son la competitividad energética, la ecología en cuanto acción climática y economía circular, y la digitalización.

La estructuración del reparto de fondos se presenta como una vorágine de expresiones de interés, iniciativas, líneas de subvenciones, cumplimentaciones enciclopédicas, oficinas, consultoras, grupos de interés, administraciones y agencias variopintas que simulan un estado paralelo, cuando ya tenemos uno con plena capacidad para ello.

Más eficaz sería una revisión fiscal en la actividad empresarial e industrial, en lo energético, ambiental y de desarrollo de las tecnologías de la información, comunicación y automatización, que promueva actividad e inversión. El Gobierno, con visión de Estado, debe plantear reformas en los impuestos, cambios estructurales en sectores desatendidos como industria y beneficios fiscales para sociedades y autónomos con una coordinación reductora de la administración en aras del sector privado y la inversión pública complementaria.

El modelo de la economía española dependerá del trabajo, la voluntad y el empeño de empresarios y administraciones y de la convicción de todos los españoles para evolucionar juntos, empresas y trabajadores, sector privado y público, con igualdad y libertad económica y tolerancia social; con trabajo y diálogo y sin idealizar unos fondos europeos que sin una gestión modélica se asemejarán más al esperpento de una desamortización patria a lo Mendizábal o a una "bienvenida Mrs. Von der Leyen".

Victoria Plantalamor, Presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM)

El Fondo Europeo de Recuperación puede representar el impulso que necesita España para poder terminar de acometer la transformación de su tejido productivo hacia una economía digital y sostenible. Papel parecido desempeñaron los recursos provenientes de la UE a partir de la década de los 90. Sin embargo, que en el periodo presupuestario 2014-2020 España solo haya gastado el 34% de los fondos comunitarios a los que tenía derecho, constituye una llamada de atención sobre nuestra capacidad de gestión. Con toda seguridad, deberíamos abordar un cambio normativo para dotar de mayor flexibilidad los procedimientos de asignación y ejecución de los fondos. Nos referimos, por ejemplo, a revisar la ley de contratos y la ley de subvenciones. El objetivo es que no se pierda ni un solo euro al que España tenga derecho. A las empresas nos preocupa la inconcreción e incertidumbre sobre el modo de acceder estas ayudas, teniendo en cuenta además que el proceso de asignación pretende ser muy rápido (en diciembre de 2022 tienen que estar comprometidos el 70% de los fondos, aunque la ejecución se extienda hasta el 2026). Está bien que sirvan para consolidar o incrementar el tamaño de empresas que ya son gigantes, pero debería hacerse un esfuerzo en los planos de la información y del procedimiento de acceso, de manera que todos los proyectos, sean tractores o individuales, involucren al mayor número de empresas posible, incluidas las pymes, que a día de hoy no entienden ni saben cómo posicionarse para llegar a la meta.

Fernando Morcillo Bernaldo de Quirós, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS)

Se conseguirá aplicarlos, sin duda, aunque con bastante retraso. Tenemos necesidades y sobrada capacidad para gestionarlos. Pero no estoy muy seguro que consigan cambiar el modelo, porque nuestra sociedad no tiene unos claros objetivos de referencia.

En el sector del agua urbana los fondos europeos, que parece que se asignarán, son muy escasos y van claramente destinados a solventar déficits que venimos arrastrando hace años respecto a la depuración de aguas residuales a poblaciones pequeñas y medianas. Comparativamente, se van a aplicar cifras que porcentualmente están por debajo de la participación del propio sector en el PIB. Y no se identifica ninguna visión política o administrativa sobre algún objetivo a partir de algún ilusionante PERTE que pudiera ser un ejemplo y a influir en el cambio de modelo. Y ello a pesar de las propuestas sectoriales.

Esta decepción inicial nos muestra un camino de esperanza, en el que debemos perseverar, y que no es otro que aquel que el sector viene revindicando hace años y que se podría definir como el de alcanzar una garante sostenibilidad -económica, ambiental y social-. Solo ajustando los aspectos de "gobernanza" a partir de la armonización regulatoria y la asunción de responsabilidades orientadas al cumplimiento de los principios de "recuperación de costes", "el que contamina paga" y la "adecuada contribución de los usuarios" se podrá mantener la eficacia y calidad de los servicios que forman parte de nuestra tradición y reconocido liderazgo internacional en materia de agua.

acceso 360

ECONOMÍA

Instituto de la Empresa Familiar

REBOLD

elEconomista.es
El Economista el Superlunes
España
01/03/21
Pr: Semanal (Lunes)
Tirada: 11.250
Dif: 11.250
Cod: 137414229
Pagina: 6
Secc: E & F Valor: 14.384,51 € Area (cm2): 938,8 Ocupac: 98,86 % Doc: 1/1 Autor: Eva Díaz MADRID. Num. Lec: 45000

La banca factura un 21% menos en comisiones de tarjetas por la crisis

El sector ingresa 1.300 millones menos en el año ante el menor consumo y las restricciones a la movilidad

Eva Díaz MADRID.

La pandemia ha tumbado los ingresos por comisiones que cobran los bancos por el uso de las tarjetas de crédito y débito. Las grandes seis entidades del país facturaron el año pasado por esta vía 5.023 millones de euros, lo que supone un 21% menos, frente a los 6.355 millones que recaudaron en el ejercicio anterior.

Los ingresos por comisiones son una línea clave para el sector financiero a la hora de compensar el leve o, incluso según las entidades, nulo crecimiento de los márgenes de intereses ante los bajos tipos. Por ello, la banca ha potenciado en los últimos años el cobro de comisiones a los clientes o la mayor exigencia de vinculación si quieren librarse de estos pagos.

Sin embargo, la caída del consumo que se está viviendo durante esta crisis sanitaria, de un lado motivada por el mayor ahorro de las familias ante la incertidumbre económica, y de otro por las restricciones a la movilidad, ha dejado huella en el uso de las tarjetas y también en el crédito que se da a través de las mismas.

La entidad que ha sufrido una mayor caída de los ingresos por esta vía ha sido BBVA. El banco azul facturó el año pasado 2.089 millones de euros en comisiones por las visas, un 27% menos que en el ejercicio anterior. Le sigue muy de cerca el Banco Sabadell, que vivió un descenso de la facturación del 26,4% y acabó ingresando 196 millones de euros. Por su parte, el Santander cobró el año pasado 1.737 millones de euros por esta vía, un 22% menos que en 2019. Cabe recordar que el Santander y BBVA son las entidades con mayores ingresos porque tienen más presencia internacional y de ahí la diferencia en volumen respecto al resto de bancos.

CaixaBank también bajó lo que recibió por comisiones de tarjetas en el año, concretamente un 16,5%, tras ingresar 423 millones. Finalmente, Bankinter facturó 55,8 millones de euros a través de este negocio, un 15,4% menos. Del lado contrario tan solo destaca Bankia, que fue la única entidad que vio incrementados los ingresos por comisiones de tarjetas, hasta un 26%, pasando a facturar 523 millones de euros. La entidad cobra seis euros al mes más 14 euros al año si no se da uso a la tarjeta de débito.

BBVA y Sabadell, los que más bajan los ingresos recaudados por la vía de las visas

Endurecen la estrategia

Los bancos, además del coste por mantenimiento de tarjetas, también han incrementado en los últimos años las tasas por el mantenimiento y uso de la cuenta corriente, sobre todo, aquellos usuarios con menos vinculación con las entidades. Esto tiene un fiel reflejo en los ingresos por comisiones por las cuentas que, aunque no todas las entidades aportan el dato desglosado, ya se refleja un alza en algunos bancos. Este es el caso del Sabadell que en 2020 ingresó por estos cobros relacionados con las cuentas vista 240 millones de euros, frente a los 193 millones que recaudó un año antes.

El Sabadell ya elevó los requisitos de vinculación en 2019 y los clientes que no tienen vinculados ingresos, tengan un saldo inferior a 1.000 euros en productos de inversión o no contraten un seguro o servicio de *renting*, pagan 60 euros al año.

Bankinter, única entidad que incrementó lo cobrado por los plásticos

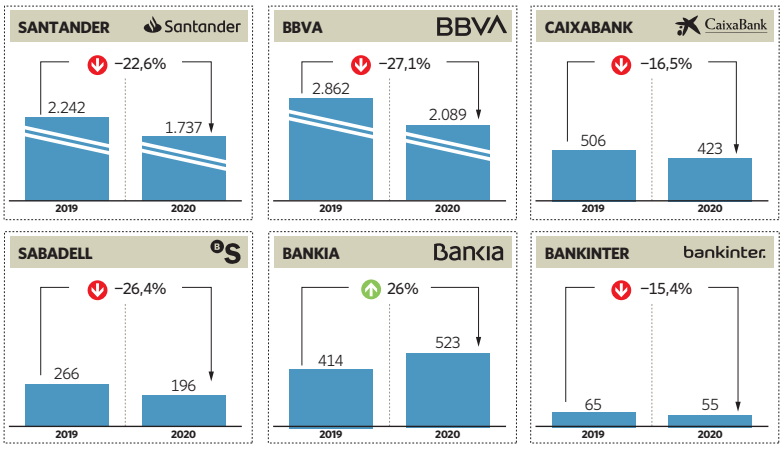
El Santander anunció el pasado otoño que a partir del 5 de noviembre de 2020 (y por tanto no tuvo práctico reflejo en el año) unificaría todas sus cuentas en *Santander One* (desapareció la *Cuenta 1,2,3*, entre otras) e incrementó los requisitos de vinculación del cliente para poder beneficiarse de no pagar comisiones. Así, además de los ingresos de nómina o pensión, el uso de tarjetas y tener domiciliados tres recibos, exige contar con un producto de financiación o de ahorro o un seguro de hogar, auto, etc. Los clientes que solo tengan vinculada la nómina o ingresos, o solo un producto de ahorro, financiación o protección, pagan 10 euros al mes por el mantenimiento de la cuenta y los usuarios inactivos, 20 euros al mes. El grupo cántabro facturó el año pasado 1.649 en comisiones por las cuentas, 26 millones menos que en 2019.

BBVA, que ha incrementado los requisitos de vinculación de cara a 2021, ingresó 322 millones por estas tasas vinculadas a las cuentas vistas, lo que supuso 21 millones más que un año antes. CaixaBank y Bankia no dan los datos. No obstante, el banco de origen catalán también inició en octubre una nueva estrategia (después de retrasarla en abril por el coronavirus), que exige mayor vinculación a los clientes si quieren librarse de las comisiones. De hecho, la entidad cobra hasta 60 euros al trimestre, es decir, 240 euros, a los usuarios menos ligados a la entidad. Para evitar comisiones, el banco pide tener domiciliada la nómina o pensión o un saldo superior a 20.000 euros en fondos de inversión, seguros de ahorro o planes de pensiones. Además, los clientes deberán tener tres o más recibos domiciliados o hacer tres o más usos con la tarjeta de crédito al trimestre. Finalmente, Bankinter ingresó por las cuentas vistas el año pasado la misma cantidad que el ejercicio previo; 18,5 millones de euros.

En total, los seis bancos facturaron por el conjunto de las comisiones 20.447 millones el año pasado, un 8,8% menos que en 2019.

Ingresos de la banca por el cobro de comisiones en tarjetas

Datos en millones de €



Fuente: Entidades.

elEconomista

elEconomista.es
El Economista el Superlunes
España
01/03/21
Pr: Semanal (Lunes)
Tirada: 11.250
Dif: 11.250
Cod: 137414240
Pagina: 13
Secc: E & F Valor: 13.317,27 € Area (cm2): 826,2 Ocupac: 91,53 % Doc: 1/1 Autor: eE MADRID / BARCELONA / BILBAO / VALENCI Num. Lec: 45000

LA CRISIS INDUSTRIAL FULMINA O AMENAZA 22.000 EMPLEOS

La pandemia y la reconversión tecnológica dificultan los intentos de reindustrialización en España

eE MADRID / BARCELONA / BILBAO / VALENCIA.

Los cierres, despidos colectivos y concursos de acreedores que afectan a grupos industriales en España que se suceden cada semana escenifican la crudeza de una crisis, la derivada de la pandemia, que amenaza con acabar con una parte sustancial del tejido empresarial del país. Los últimos golpes atañen de nuevo al motor, con el cierre de una segunda planta de Bosch en Cataluña que provocará el despido de 330 trabajadores, y a una de los emblemas de la industria andaluza, Abengoa, que el pasado lunes solicitó el concurso voluntario de acreedores. Solo los casos más mediáticos suponen la extinción o peligro de desaparición de más de 22.000 empleos en España.

Muchos ya arrastraban problemas antes del coronavirus por pertenecer a sectores en reconversión, pero la pandemia ha agravado su situación y las opciones de reindustrialización, como está pasando con los intentos de buscar continuidad a las plantas de Nissan en Barcelona antes de que la multinacional japonesa se marche a final de año, lo que afecta a 3.000 empleados directos y más de 20.000 familias sumando a proveedores. También buscan relevo, de momento sin éxito, otras factorías de componentes de automoción en Cataluña que han anunciado su cierre, como Continental, TE Connectivity, Bosch y U-Shin.

Otra de las empresas que ha bajado la persiana definitivamente es el fabricante de tapicería para la industria del automóvil Jobelsa. La compañía de Benicàssim (Castellón) presentó concurso de acreedores y anunció el cese de la actividad a finales de 2020 después de la pérdida de varios contratos y el descenso de la producción por el recorte en la fabricación de coches por la crisis sanitaria. Una medida que conllevó el despido de sus 131 trabajadores en la factoría castellonense.

La caída de la ingeniería sevillana Abengoa se ha precipitado tras la negativa de los bancos acreedores a dar más prórrogas al acuerdo de reestructuración pactado el pasado verano y que ha sido imposible concretar por las tiranteces entre el Gobierno y la Junta de Andalucía a la hora de asumir las ayudas. Al menos por ahora, porque el concurso implica en este momento únicamente a la matriz, Abengoa SA. La deuda de esta sociedad se aproxima a los 1.000 millones de euros. En las próximas semanas se dirimirá si la siguen el resto de filiales del grupo y que en su conjunto totalizan cerca de 6.000 millones de pasivos, lo que convertiría su quiebra en la segunda mayor de España tras la de Martinsa Fadesa (7.200 millones).

De entre las filiales, sobre Abengoa Abenewco 1, el vehículo que ha ido asumiendo en los últimos dos años todos los negocios y activos del grupo andaluz y del que dependen la mayoría de los cerca de 14.000 trabajadores que tiene en todo el mundo. La reestructuración fallida, de hecho, implica a esta sociedad. Gobierno, Junta de Andalucía, bancos y acreedores aún no tiran la toalla para poder encontrar una solución. En las próximas semanas se desvelará si ésta es aún posible, pero la premura es máxima porque el deterioro de la actividad se multiplica por días y las noticias sobre el concurso de la matriz perjudican la ya maltrecha confianza con los clientes y proveedores.

Duro Felguera, insignia de la industria asturiana, también enfrenta su propia crisis y ante el cerrojazo de los bancos, que la mantienen sin avales desde hace dos años, ha acudido al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sepi. Solicita 120 millones de euros y también está previsto que el Gobierno de Asturias participe en el rescate con ayuda financiera.

También están acuciadas por acreedores y han pedido ayuda al fondo de rescate de la Sepi las siderúrgicas Celsa y Tubos Reunidos, y otro paradigma de la crisis industrial es el de Alcoa. La empresa quería cerrar las factorías de La Coruña y Avilés, pero finalmente se salvaron, al comprarlas Parter Capital en 2019, que a su vez las traspasó a Alu Ibérica en marzo del año pasado. En mayo, la multinacional norteamericana anunció su intención de cerrar la fábrica de aluminio primario de San Ciprián (Lugo), totalmente estratégica, por ser la única en su clase del país. Alcoa rechazó una oferta de compra de la Sepi –como paso previo para venderla a Liberty–, provocando que la Justicia gallega anulara el ERE de extinción de los 534 trabajadores, al entender que había "mala fe" y le obligara a readmitirlos. En la actualidad, Alcoa y el Ministerio de Industria negocian las condiciones de la venta a la Sepi, que a su vez debería traspasarla a Liberty, que sige interesada en adquirirla.

Sin salir de Galicia, este febrero se ha cerrado la fábrica de palas de aerogenerador de Siemens Gamesa en As Somozas (La Coruña), junto con otra fábrica de la empresa dedicada a reparaciones en Cuenca; en verano clausuró otra planta en Aoiz (Navarra). Aunque la industria renovable es una de las ganadoras del proceso de transición energética, los equipos no tienen por qué ser *made in Spain*; la compañía hispanoalemana adquirió el año pasado una moderna fábrica en Portugal, mucho más rentable que las españolas, y ha optado por aplicar la lógica económica; ninguna de las opciones que le presentaron empresas como Greenalia o Endesa fue lo suficientemente atractiva para mantenerlas abiertas.

Endesa, precisamente, es la protagonista del que probablemente sea el mayor proceso de cierre industrial del país: el desmantelamiento de las centrales eléctricas de carbón, por imperativo climático, que culmina el proceso de abandono de la minería del negro mineral, iniciado hace décadas. Entre 2020 y 2021 empiezan los trabajos de desmantelamiento de 11 plantas, cuatro de Endesa –las más grandes y con más impacto socioeconómico–, tres de Naturgy, dos de Iberdrola y otras dos de EDP, adquiridas a Viesgo a finales de año.

Otro de los grandes golpeados por el coronavirus es el sector aeronáutico vasco. Proveedores de primer nivel como Aernnova e ITP Aero han puesto en marcha ajustes laborales. Aernnova, dedica al diseño y fabricación de aeroestructuras, con sede social en Álava y una red de fábricas, centros de ingeniería y oficinas en Toledo, Sevilla, Cádiz, Orense y Zaragoza, y un total de 4.700 trabajadores, anunció en julio el ajuste para adaptar su producción a la caída de la demanda, superior al 40%: 950 despidos, 650 de ellos en España. En el caso de la vizcaína ITP Aero de motores de aviación, comunicó un ajuste de su plantilla del 15% en los cinco países en los que está presente, unos 600 trabajadores, sobre un total de 4.000. Perteneciente a Rolls-Royce, facturó cerca de 1.000 millones en 2019.

Y también se han anunciado ajustes en el sector alimentario, como los de Heineken y Coca-Cola, o el cierre de la textil Italco.

Cierres, despidos y concursos industriales

SECTOR	EMPRESA		LUGAR	2013
Siderurgia	ALCOA	Alcoa	Lugo	534
	CELSA GROUP	Celsa	Castellbisbal (Barcelona)	8.400
	Tubos Reunidos	Tubos Reunidos	Amurrio (Álava)	1.800
Renovables	ABENGOA	Abengoa	Sevilla	3000
	SIEMENS Gamesa	Siemens Gamesa	Aoiz (Navarra), As Somozas (La Coruña) y Cuenca	506
Automoción	NISSAN	Nissan	Barcelona	3.000
	jobelsa Automotive	Jobelsa	Benicassim (Castellón)	131
	BOSCH	Bosch	Castellet i la Gornal, Lliçà d'Amunt (Barcelona)	630
	Continental	Continental	Rubí (Barcelona)	760
	TE connectivity	TE Connectivity	Montcada i Reixac (Barcelona)	248
	u-shin	U-Shin	Abrera (Barcelona)	72
Textil		Italco	Sant Quirze del Vallès (Barcelona)	246
Alimentación	HEINEKEN	Heineken	Madrid, Sevilla, Valencia y Jaén	228
	Coca-Cola	Coca-Cola	Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana,, Baleares, Canarias, Galicia, Madrid, Extremadura, País Vasco, Aragón, Cantabria, Asturias y Murcia	360
Centrales térmicas de carbón	hc energía	EDP	Cádiz, Córdoba	–
	endesa	Endesa	Almería, La Coruña, León y Teruel	577
	Naturgy	Naturgy	León, Asturias y La Coruña	239
	IBERDROLA	Iberdrola	Palencia y Asturias	*
Ingeniería	df	Duro Felguera	Gijón (Asturias)	1.300

Fuente: elaboración propia. (*) Recolocados. elEconomista

Chimenea industrial. ISTOCK

Información elaborada por
Estela López, Tomás Díaz, Javier Mesones, Maite Martínez y Ángel Álvarez.

elEconomista.es
El Economista el Superlunes
España
01/03/21
Pr: Semanal (Lunes)
Tirada: 11.250
Dif: 11.250
Cod: 137414205
Pagina: 21
Secc: POLÍTICA - ECO Valor: 10.128,42 € Area (cm2): 629,7 Ocupac: 69,61 % Doc: 1/1 Autor: Juan Ferrari MADRID. Num. Lec: 45000

Escrivá prohibirá que los convenios impidan seguir en activo a los 67 años

La patronal rechaza la intención del ministro de limitar la potestad de negociación de las partes

Los sindicatos restan importancia a este nuevo foco de conflicto en la mesa de las pensiones

Juan Ferrari MADRID.

Ha surgido un nuevo foco de conflicto en la Mesa de Diálogo Social para la reforma de las pensiones en la que negocian el Ministerio de Seguridad Social con la patronal y los sindicatos. El titular del departamento, José Luis Escrivá, ha trasladado su voluntad de impedir por ley que los convenios colectivos prohiban a los empleados seguir en su puesto de trabajo una vez cumplan la edad legal de jubilarse, actualmente en 66 años. La propuesta no ha gustado a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que entienden que supone cercenar la libertad de negociación de las partes en los convenios colectivos y una dificultad para renovar las plantillas y crear más empleo, según explican a *eE* fuentes conocedoras de la negociación.

Alta cualficación

Desde los sindicatos, la postura es más neutra al entender que son muy pocos los trabajadores que continúan en activo una vez alcanzada la edad legal de jubilación y en su mayoría son trabajadores de alta cualificación bien remunerados. Precisamente, un colectivo en el que quieren incidir las empresa para abrir la puerta a la innovación.

El propio Escrivá sugirió la necesidad de la medida el pasado viernes. "Es una anomalía que existe. Queremos propiciar la jubilación demorada. No podemos tener una cláusula que fuerce a una persona a jubilarse a una determinada edad", añadió Escrivá.

La jubilación es voluntaria en España. Así está consolidado en la jurisprudencia, según explica Fernando Moreno, consejero de Arias Consultores, que aclara que la jubilación no es una obligación, sino un derecho como se recoge en el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social.

Sin embargo, los agentes sociales, especialmente los empresarios, siempre han pretendido que los convenios colectivos tengan la potestad legal de poder cercenar esta voluntariedad exigiendo que los trabajadores se retiren al llegar a la edad legal de jubilación. Una potestad que debe estar condicionada a la creación de empleo.

La posibilidad de que los convenios impidan continuar en el puesto de trabajo a discreción del trabajador ha entrado y salido de la legislación laboral española. Hay que remontarse al año 1953 cuando aparece por primera vez en la ley de convenios colectivos.

> El primer gobierno de Pedro Sánchez aprobó la medida que Escrivá quiere ahora suprimir

Sin irse tan lejos, la reforma laboral de 2012 derogó la potestad legal de los convenios de imponer la retirada obligatoria al alcanzar la edad de jubilación. Como curiosidad, los diputados del PSOE y de Izquierda Plural (hoy socios de Gobierno) recurrieron al Tribunal Constitucional dicha medida.

Pero los agentes sociales insistieron al Gobierno en el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) de 2018 para que volviese a dotar a los convenios la potestad de pactar la imposición de la jubilación. En ese año, aprovechando el DL de Revalorización de las Pensiones el PSOE devuelve a los convenios la facultad de pactar la exigencia de la jubilación forzosa a la edad legal.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. EFE

Dicho texto normativo modifica la disposición adicional décima del ET, encargada de este materia, aunque impone que deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo, como la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales en indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores, el relevo generacional u otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo.

> En España hay 267.200 ocupados de 65 o más años, la mitad de ellos asalariados

En 2019, los convenios firmados incluían esta cláusula para 1,1 millones de trabajadores, un tercio de los regulados ese año.

En cualquier caso, las personas que siguen ocupadas superados los 65 años son escasas, 267.200 a finales del año pasado, según la EPA. De ellos, la mitad –133.200– eran asalariados y la otra mitad autónomos, más proclives a alargar el periodo laboral por su baja pensión. De los 133.200 asalariados, algo más de 91.700 estaban en el sector privado y otros 41.500 en el público.

elEconomista.es
El Economista el Superlunes
España
01/03/21
Pr: Semanal (Lunes)
Tirada: 11.250
Dif: 11.250
Cod: 137414241
Pagina: 14
Secc: E & F Valor: 10.349,44 € Area (cm2): 644,6 Ocupac: 71,13 % Doc: 1/1 Autor: J. M. MADRID. Num. Lec: 45000

Las constructoras se preparan para crecer en Reino Unido tras el 'Brexit'

Un análisis de EY señala las medidas que deben tomar ante la nueva realidad

J. M. MADRID.

Las compañías de infraestructuras españolas se preparan para crecer en Reino Unido tras el Brexit, finalmente con acuerdo. El mercado británico ha sido desde hace años una apuesta decidida de grupos españoles y la ruptura del país con la Unión Europea (UE) no cambia esta estrategia, pero han de abordarla desde una nueva realidad.

Las oportunidades en Reino Unido seguirán, con planes de inversión en infraestructuras multimillonarios en infraestructuras ferroviarias, viarias y de equipamiento público. Constructoras como Ferrovial, ACS, Acciona, Sacyr y FCC tienen una posición destacada y en muchos casos llevan años trabajando en la línea de ser consideradas cada vez más como empresas locales en el país. Ahora bien, con el Brexit, se abre una serie de incertidumbres y de cambios regulatorios que requieren la adopción de medidas.

EY examina en un informe en qué medida el Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA) aborda las principales preocupaciones del sector y cuáles son las medidas a tomar en el nuevo escenario. Bajo el título *¿Qué implica el Brexit Deal para el sector de la construcción?*, el socio responsable del sector de Construcción e Infraestructuras de EY, Fernando González Cuervo, concluye que "si bien el TCA superará algunas de las preocupaciones más graves con respecto a un escenario sin acuerdo, no ha eliminado todas las complicaciones, ni ha aliviado a las empresas de la necesidad de considerar el impacto del Brexit en sus negocios. A pesar de que el Período de Transición ya ha terminado, no es demasiado tarde para ser proactivos, con el objetivo de retener el talento así como a reducir o evitar costes, retrasos y posibles responsabilidades contractuales".

> Ferrovial, ACS, FCC, Sacyr o Acciona tienen el mercado británico entre sus prioridades

González Cuervo enumera cuatro preocupaciones. En primer lugar, hace referencia a la libre circulación y coste de materiales. "El TCA ha garantizado que no habrá aranceles sobre las mercancías que se muevan entre la UE y el Reino Unido, siempre que se cumplan las normas de origen en relación con estas. Sin embargo, es necesario hacer declaraciones en la aduana al importar o exportar mercancías", explica. Por ello, "las empresas que dependen de materiales importados, ya sea directamente o a través de un tercero, deben evaluar la posibilidad de que surjan retrasos en la llegada de esos productos". Así, "deben negociar con sus proveedores los posibles retrasos en las entregas, y considerar el efecto que dichos retrasos pudieran tener para cumplir con los requisitos de entrega de los contratos". Ante la posibilidad de un incumplimiento, "las negociaciones con empleados y clientes deben anticiparse. Las empresas también pueden considerar las cláusulas de fuerza mayor".

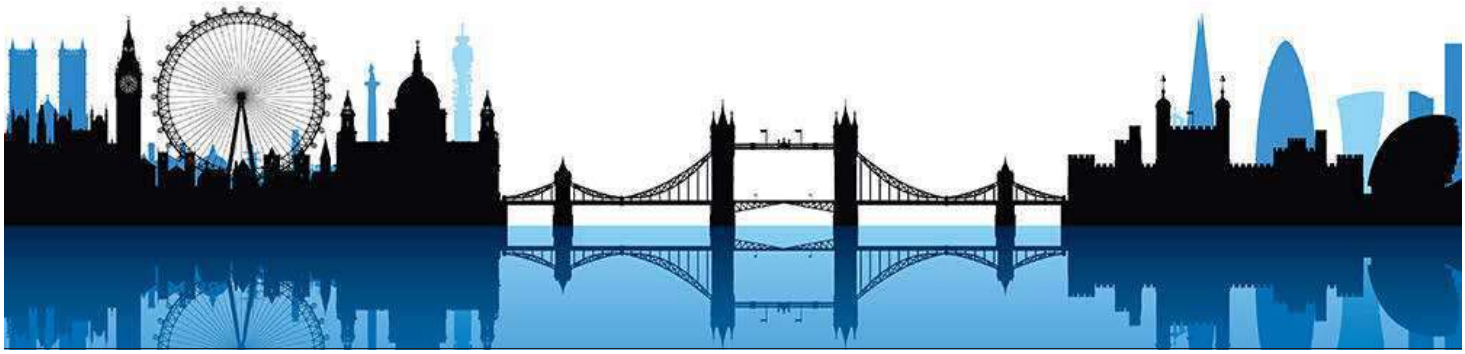
Una segunda preocupación es la relativa a la contratación pública y oportunidades de proyectos. "Dejar la UE creó un riesgo de que las empresas del Reino Unido quedaran excluidas de las oportunidades de proyectos basados en la UE (por ejemplo, en relación con las infraestructuras)", señala EY. "La preocupación relativa al acceso a los mercados se ha visto parcialmente mitigada por la entrada del Reino Unido en el ACP en diciembre de 2020", subraya. El ACP es un acuerdo plurilateral entre 19 Estados en todo el mundo y la UE, cuyo propósito es garantizar que los gobiernos permitan que las oportunidades de contratación pública se abran a las empresas de los otros estados.

En opinión de González Cuervo, "el TCA confirma en gran medida que la UE y el Reino Unido se garantizarán mutuamente un marco de contratación transparente y competitiva en la línea establecida en el ACP". El Reino Unido y la UE también han acordado una ampliación de la cobertura de acceso a los mercados para incluir proyectos que no están incluidos en el ACP. Para las empresas del Reino Unido que compiten por oportunidades contractuales en el extranjero, "una solución práctica" si los tipos de contratación que les interesan están incluidos en la cobertura del TCA o del ACP, "puede ser establecer una filial con sede en la UE o licitar junto con socios de consorcios con sede en la UE", explica.

> Enfrentan desafíos en la circulación de materiales, la mano de obra, las normas o la contratación

La tercera preocupación atañe a normas y regulación. "Las empresas deben revisar el etiquetado de sus productos, así como los requisitos que debe cumplir si actúan como *importador*. La mayoría de los productos con la marca CE todavía pueden venderse legalmente en Reino Unido hasta finales de 2021", precisa. Sin embargo, hay ciertas excepciones. Además, "durante 2021, las empresas que se dedican a la fabricación de materiales pueden necesitar prepararse para la transición al nuevo etiquetado UKCA para 2022", señala.

El cuarto asunto es el de la mano de obra. "Muchas empresas de construcción e ingeniería han temido una posible escasez de trabajadores que podría incrementar los costes de mano de obra y la capacidad de cumplir con los plazos de entrega, incluso hacer inviables muchos proyectos", afirma. A juicio de EY, el TCA no lo resuelve. "Las empresas de la UE con empleados en Reino Unido deben planificarse para garantizar que sus trabajadores que sean ciudadanos de otro país de la UE puedan justificar hasta el 30 de junio de 2021 que ya vivían en Reino Unido antes de terminar 2020 para obtener el *pre-settlement* status" o *settlement status*". "Es muy aconsejable que realicen un censo de las nacionalidades de sus trabajadores locales, pues si algún empleado de otro país UE no realiza este trámite antes de julio de 2021, la entidad podría encontrarse sin saberlo en una situación de contratación ilegal", avisa.



elEconomista.es
El Economista el Superlunes
España
01/03/21
Pr: Semanal (Lunes)
Tirada: 11.250
Dif: 11.250
Cod: 137414196
Pagina: 28
Secc: POLÍTICA - ECO Valor: 13.956,14 € Area (cm2): 930,9 Ocupac: 95,92 % Doc: 1/1 Autor: Àlex Soler/ Estela López BARCELONA. Num. Lec: 45000

EL 74% DEL PIB CATALÁN ESTÁ EN LA UCI TRAS UN AÑO DE PANDEMIA

Comercio y restauración reprochan a la Generalitat mantener unas restricciones que ven arbitrarias

Àlex Soler/ Estela López BARCELONA.

Dentro de unos días, el próximo 14 de marzo, el estado de alarma por la llegada del coronavirus a España cumplirá un año, y desde entonces se han sucedido varios periodos con distintos grados de confinamiento y restricciones a la actividad económica que en Cataluña todavía suponen grandes limitaciones, por lo que el tejido productivo está llegando a situaciones límite y reclama más apoyos y levantar medidas que en algunos casos ven arbitrarias e inefectivas para frenar contagios.

En 2020, el PIB de Cataluña cayó un 11,4%, especialmente castigado por el descenso del 11,6% del sector servicios -que supone el 74% del PIB total de la región-, fuertemente dependiente del turismo por ser tradicionalmente el primer destino de los visitantes internacionales de España. Pese a que no todos los sectores han sufrido la pandemia con la misma severidad, y de hecho hay quienes han mejorado sus cifras gracias a los cambios en la vida de las personas, la gran mayoría recordarán 2020 como un año negro y la recuperación en 'V' es poco más que una utopía en un 2021 que no despierta optimismo.

Entre los sectores más afectados están, por ejemplo, la restauración y los alojamientos turísticos. En Barcelona, el Gremio de Restauración no da cifras concretas de pérdidas porque la pesadilla todavía no ha terminado, pero Roger Pallarols, su presidente, no duda en afirmar que "cerramos un año [2020] negro". "Desde el punto de vista económico es un año fallido. Cada día hay más destrucción empresarial, más desocupación y se constata que Barcelona queda en una situación muy preocupante", asegura. "Queda patente la ineficacia y la nefasta gestión política que ha habido de la crisis en el caso de Barcelona y Cataluña, donde no se ha encontrado el modo de estabilizar el funcionamiento del sector. No se ha encontrado un equilibrio entre gasto y el bajo nivel de ingresos", añade. Pallarols no sabe con exactitud cuántos establecimientos han cerrado para no abrir nunca más, pero sí estima que la cifra, en el momento de la redacción de este reportaje, ronda el 25%. "Antes del Covid había unos 9.500 locales en Barcelona y a día de hoy creemos que un 25% ha cerrado definitivamente", confirma antes de lanzar un vaticinio poco menos que horroroso. "Si no se pone freno a estas políticas de restricciones la cifra puede llegar a multiplicarse y se podrían perder alrededor del 50% de los establecimientos", admite. Dicho de otro modo, uno de cada dos restaurantes podría cerrar.

Comercio y restauración cerrados. LUIS MORENO

YA ESTÁ DISPONIBLE UN NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA DIGITAL 'EL ECONOMISTA CATALUNYA'. Con análisis e información a fondo sobre la actualidad económica catalana del último mes y perspectivas futuras. Puede leerla o descargarla de manera gratuita a través de Internet en 'www.eleconomista.es/kiosko/catalunya'. También puede recibirla cada mes en su correo electrónico indicando su dirección en el formulario que encontrará en la web.

Desde el turismo, hoteles y apartamentos turísticos han visto como su negocio se ha hundido ante la falta de turistas extranjeros. Desde el Gremio de Hoteles de Barcelona confirman que solo hay abierto un 24,89% de los establecimientos, 109 en la ciudad, concretamente. Desde Apartur, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, Enrique Alcántara, su presidente, explica que el año ha sido malo por la ausencia de turistas extranjeros y que "hay empresas que están al límite porque llevan perdiendo dinero desde el pasado mes de marzo". Alcántara espera que, a partir de 2021, "la mejora sea progresiva" y confía en que, por sus características, "el apartamento turístico sea el más demandado cuando se reactive el turismo". "Cada apartamento generaba, de media, 3.000 euros mensuales de impuestos, tenemos que mantener las empresas sea como sea", acaba. "2020 fue terrible", añade David Riba, presidente de Federatur, el equivalente de Apartur a nivel catalán. "Las caídas de la facturación fueron de entre el 70% y el 80% respecto a 2019 y la mayoría del personal sufrió Ertes". Para 2021, Riba admite que "hasta que no mejore la situación no sabemos cómo será la recuperación, si parecida a una 'V' o más lenta. Tendrá mucho peso el turismo intercontinental".

Más allá del turismo y la restauración, sectores como el deportivo y el comercio también han sufrido sobremanera, así como la industria, que ha visto caer su producción y sus ventas de un modo importante. Fuentes del Indescat, el clúster catalán del deporte, consultadas por elEconomista confirman que las pérdidas para el sector deportivo en 2020, en comparación con 2019 fueron de 272 millones, dejando de facturar aproximadamente 193 millones de euros más por la cancelación de eventos y el cierre de servicios. El sector deportivo dejó de aportar 892 millones de euros al VAB catalán. Con datos actualizados al 7 de febrero, en 2021 ya se han dejado de facturar 118,5 millones de euros. "Muchas empresas no pueden resistir más y todavía quedan meses de obstáculos por delante", lamenta Anna Pruna, presidenta del Indescat. "Si el Gobierno no rectifica, no quedará nada por salvar", añade. En lo referente a la industria, el ejemplo de Seat sirve de indicador, si bien sus números son mucho mejores que los de la mayoría de empresas catalanas, pese a haber caído. La automovilística cerró 2020 con 350.000 coches producidos, un 30% menos respecto a 2019, y para 2021 espera ensamblar 483.000 unidades, lejos de las más de 500.000 del mismo 2019. Las ventas totales, en todo el mundo, alcanzaron los 427.000 coches, un 25,6% menos respecto al año anterior.

> Hay 1,04 millones de trabajadores catalanes en Erte, la mayoría en la restauración

En cuanto al comercio, según Barcelona Oberta, la unión de ejes comerciales de la Ciudad Condal, la intención de cierre de establecimientos acumula, desde el primer estado de alarma, el 38%, debido a la pérdida del 70% del tráfico de peatones respecto al 2019. Según la entidad, la caída de ventas el último trimestre de 2020 fue de más del 50% en el 68,8% de los establecimientos y el 88,4% de los locales tiene parte de la plantilla en Erte.

Para leer más
www.eleconomista.es/kiosco/
Catalunya
elEconomista

elEconomista.es
El Economista el Superlunes
España
01/03/21
Pr: Semanal (Lunes)
Tirada: 11.250
Dif: 11.250
Cod: 137414215
Pagina: 27
Secc: POLÍTICA - ECO Valor: 6.461,68 € Area (cm2): 437,3 Ocupac: 44,41 % Doc: 1/1 Autor: Maite Martínez BILBAO. Num. Lec: 45000

La economía vasca recuperará todo lo perdido, como pronto, a final de 2022

El PIB cayó un 9,5% en 2020 y desaparecieron 1.600 empresas y 22.000 empleos

Maite Martínez BILBAO.

La economía vasca tardará en recuperar el crecimiento perdido durante 2020, por lo menos, hasta finales de 2022. Así lo manifestaron algunos de los principales actores económicos, empresariales e institucionales participantes en una jornada de APD Norte sobre la 'Situación económica y perspectivas empresariales en Euskadi'.

Tras la presentación realizada por el nuevo presidente de la asociación de directivos de la zona, Eduardo Junkera, su homólogo en la patronal Confebask, Eduardo Zubiaurre, hizo un balance de las "heridas" provocadas por el coronavirus un año después. "La actividad económica ha caído un 9,5%, hemos perdido 1.600 empresas y se han destruido unos 22.000 empleos y, además, otros 32.000 trabajadores siguen en Erte", señaló.

El presidente de la patronal vasca también recordó que "todo apunta a que la recuperación de todo lo perdido no llegará hasta finales del año que viene. Y fían al segundo semestre de este año el inicio de un crecimiento sostenido".

Salvaguardia del Pacto de Estabilidad

Pedro Azpiazu agradeció la decisión de la Comisión Europea de aplicar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), para permitir una desviación temporal de los requisitos normales para todos los Estados miembros en materia de déficit, deuda y regla de gasto. "Afortunadamente, se ha entendido que la salida de la crisis no puede ni debe realizarse como se hizo tras la Gran Recesión de 2008".

Según comentó Zubiaurre, Euskadi tiene una "base sólida de empresas, condición básica para afrontar con garantías de éxito cualquier crisis, junto a la estabilidad institucional". Además, ante la situación que atraviesan varios sectores de actividad en Euskadi, con fuertes conflictos laborales, el dirigente de Confebask llamó a colaborar y "a llegar a acuerdos internos en las empresas, con la idea de salvaguardar los puestos de trabajo y la viabilidad de la actividad".

El consejero vasco de Economía, Pedro Azpiazu, en la jornada de APD Norte. EE

Además de Eduardo Zubiaurre, expusieron su perspectiva empresarial en el contexto actual la presidenta de Grupo Ingeteam, Teresa Madariaga; el presidente de Grupo Eroski, Agustín Markaide, y el director general de Mercedes Benz-España, Emilio Titos.

Iniciativa 'Next Generation'

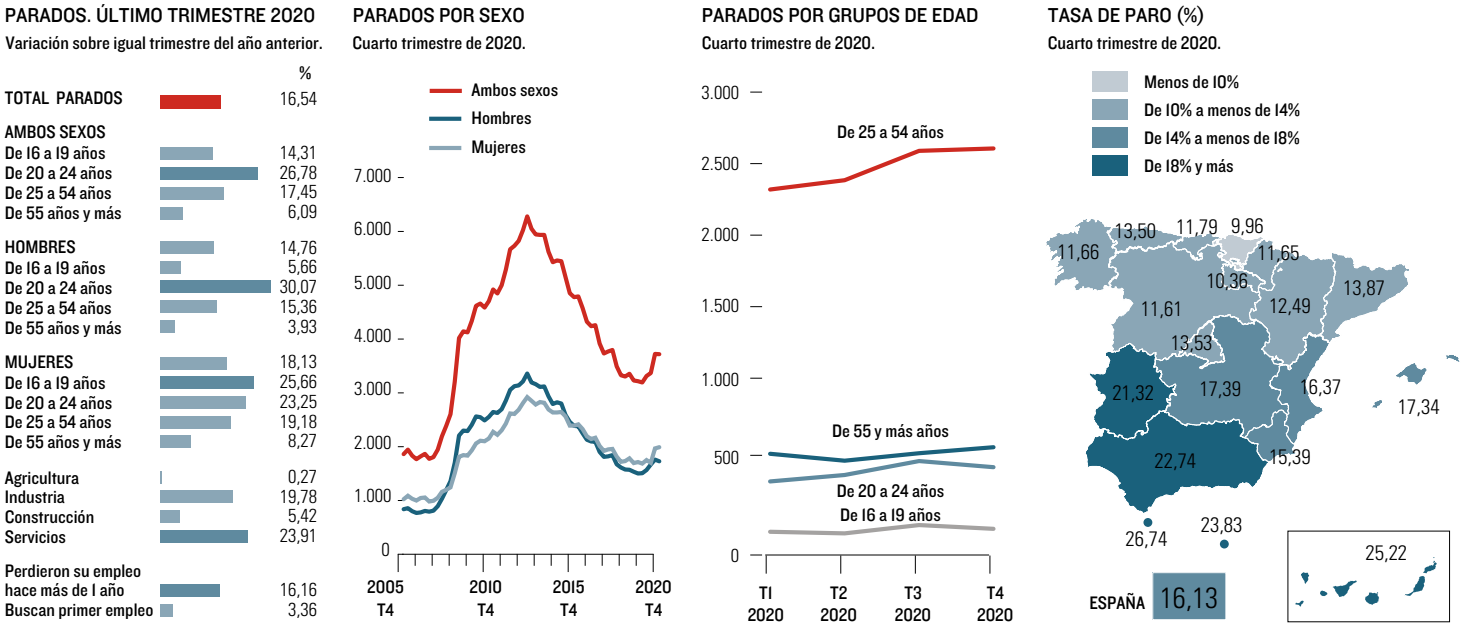
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, clausuró la jornada de APD y en su intervención subrayó la importancia de la iniciativa *Next Generation EU*. "Ha de suponer un hito histórico en la construcción europea porque puede catalizar, si se gestiona debidamente, la tan necesaria reconstrucción, transformación y resiliencia".

En este sentido, Azpiazu se refirió a la estrategia *Euskadi Next 21-26*, el conjunto de inversiones para la recuperación, la transformación y la resiliencia de Euskadi. "Un documento que en coordinación con las tres diputaciones forales y los ayuntamientos de las tres capitales vascas hemos trasladado al Gobierno de España para optar a los Fondos Next Generation EU".

Esta primera versión recoge ocho ámbitos estratégicos, con 188 inversiones -entre la que destacan 16 Proyectos Estratégicos-, que prevén movilizar 13.135 millones.

EL MUNDO
El Mundo
España
01/03/21
Pr: Diaria
Tirada: 106.740
Dif: 75.331
Cod: 137416346
Pagina: 26
Secc: ECONOMÍA Valor: 47.532,86 € Area (cm2): 774,5 Ocupac: 91,59 % Doc: 1/1 Autor: CÉSAR URRUTIA MADRID Un año después de l Num. Lec: 559000

UN MERCADO LABORAL HUNDIDO



FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

Dina Sánchez / EL MUNDO

Desánimo laboral en máximos

● La población que desespera de encontrar empleo llegó a máximos en 2020 ● Trabajo admite que es la cifra más alta desde que existen registros mientras previene un mayor aumento del paro con nuevas políticas activas de empleo

CÉSAR URRUTIA MADRID

Un año después de la irrupción del coronavirus, el mercado laboral español ha visto dispararse el número de personas que se ven desmoralizadas por sus posibilidades de encontrar trabajo. Si 2019 marcó un mínimo entre la población que desespera de encontrar empleo con poco más de 300.000 personas desanimadas, en 2020 este colectivo casi llegó a triplicarse hasta rondar los 850.000. El Ministerio de Trabajo así lo asume en un documento interno en el que analiza su estrategia para relanzar sus políticas activas de empleo en las próximas semanas.

«Existe una parte de la población desempleada que no aparece de forma visible en las estadísticas: se trata de aquellas personas que no encuentran un nuevo empleo y ni siquiera se registran como demandantes en los Servicios Públicos de Empleo», explica Trabajo para definir el «efecto desánimo», un fenómeno que no es nada nuevo y que lleva a que hombres y mujeres en edad y condiciones de trabajar dejen de intentarlo.

La novedad es que, como consecuencia de la crisis, las cifras del desánimo se dispararon en 2020. «Según Eurostat, el porcentaje de la población activa, de entre 20 y 64 años, que podría buscar trabajo y no lo hace, fue del 5,8% en el segundo trimestre de 2020. Es la cifra más alta desde que se tienen registros (2005)», señala el documento.

Al cierre de 2020 la situación de crisis se reflejaba en que, según datos de la EPA, los «desanimados» en el cuarto trimestre ascendían a 295.500, a los que habría que añadir 384.800 las personas que queriendo trabajar, no fueron contabilizadas en la EPA por incumplir sus requisitos.

Yolanda Díaz en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado a finales de febrero. EFE

La suma de ambos alcanza así casi las 700.000 personas. Este colectivo tiene sus grupos más vulnerables en los dos extremos de las franjas de edades de la población activa: la de los que van de los 16 a los 24 años y la de los mayores de más edad. La desmoralización es más prevalente entre mujeres que entre hombres, como ha reflejado Fedea en su último informe sobre la infrautilización del trabajo el pasado mes de febrero.

Díaz se enfrenta de este modo a un panorama laboral muy complicado a las puertas de la campaña de vacunación que debería dar pie a la desescalada de restricciones de horarios y movilidad. Por otro lado, también está pendiente la definición en las próximas semanas de un plan de ayudas de 11.000 millones de euros que aún se discute. En el seno de Economía y de organismos como el Banco de España el sentido que se quiere dar a estos recursos es el de mejorar la solvencia de las empresas en dificultades favoreciendo a las viables y facilitando la suspensión de las que no lo sean. El plan genera una fuerte polémica entre patronales que no quieren oír hablar de negociar una criba de empresas y sindicatos que rechazan aprobar ayudas públicas que financiarían despidos.

Las bonificaciones favorecerán a los colectivos más vulnerables

En cualquier caso, cierres y reestructuraciones podrían abrir un intenso proceso de destrucción de empleo. A falta de los datos que mañana presenten los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, entre parados, afectados por ERTE y autónomos en cese de actividad más de cinco millones de personas quieren trabajar y no pueden. De ellos 641.000 son ya parados de larga duración, un 51% más que hace un año.

Ante esa situación, la ministra Díaz lleva semanas adelantando una nueva generación de políticas activas de empleo, ya que la situación generada por el Covid ha rebasado la capacidad de las actuales, puestas ya en solfa por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando presidía la AIReF.

Entre los cambios que prepara Díaz figura modificar incentivos a la contratación para favorecer a los colectivos más vulnerables, entre quienes se encuentran los perceptores del ingreso mínimo vital. También la puesta en marcha de nuevos centros de orientación con la consolidación de 3.000 trabajadores en estos servicios. Los recursos destinados a las Políticas Activas de Empleo (PAE) alcanzan 6.482 millones de euros, un 35,75 % más que en 2020, cuando el esfuerzo destinado a prestaciones, disparó el presupuesto del SEPE por encima de los 36.000 millones de euros, el doble que en 2019.

EL PAÍS
El País
España
01/03/21
Pr: Diaria
Tirada: 148.988
Dif: 103.021
Cod: 137414852
Pagina: 40
Secc: ECONOMÍA Valor: 59.547,79 € Area (cm2): 884,4 Ocupac: 93,34 % Doc: 1/1 Autor: L. DELLE FEMMINE / H. GUTIÉRREZ, Madrid Num. Lec: 859000

El Gobierno presiona para que las autonomías den las ayudas directas

Las comunidades usarán 2.000 millones de fondos de la UE para los sectores más afectados

L. DELLE FEMMINE / H. GUTIÉRREZ, **Madrid**

El debate sobre las ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis sigue abierto. El nuevo paquete de 11.000 millones anunciado por el Gobierno no ha despejado las dudas: por ahora todo apunta a un plan para reforzar la solvencia de las pymes, pero no a transferencias directas que compensen la caída de ingresos. El Ejecutivo insiste en que sean las comunidades las que asuman este esfuerzo, utilizando las transferencias que les ha dado Hacienda y su asignación de los fondos europeos. Las patronales de turismo, hostelería y comercio avisan: solo con el músculo financiero de las autonomías será insuficiente.

El golpe causado por la pandemia ha sido durísimo, y levantar la cabeza está siendo más difícil de lo esperado. El Gobierno logró evitar una destrucción masiva de empleo y empresas el año pasado —con medidas como los ERTE y los créditos ICO—, pero la duración de la crisis, más larga de lo previsto, mete presión para diseñar nuevos apoyos. Las autonomías más dependientes del turismo han sido las más golpeadas, y los sectores más afectados por las restricciones, asfixiados ante la lentitud de la recuperación, piden a gritos ayudas directas para salir adelante.

"Vamos por el tercer plan de apoyo al turismo y hasta ahora todos han sido insuficientes. Si los 11.000 millones anunciados no tienen en su mayoría ayudas directas para facilitar tesorería inmediata, será muy difícil evitar que muchas de las empresas caigan", advierte José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur. Este organismo cifra en algo más de 5.300 millones la cantidad que el sector precisa para los próximos seis meses. Hostelería y comercio también han hecho sus cuentas y solicitan 12.500 millones en transferencias para aguantar.

De momento, las peticiones han caído en saco roto. El Gobierno ha asegurado que en marzo dará los detalles del paquete de 11.000 millones para estos sectores anunciado la semana pasada por el presidente Pedro Sánchez. Pero todo apunta a un plan para aliviar la deuda de las pymes y reforzar su capital, más que a ayudas directas. Esta es la respuesta del Ejecutivo a la presión —externa y en el seno del Gobierno de coalición— para que se abra el grifo. Especialmente después de que el BCE le sacase los colores a España al señalarlo como el país que más arrastró los pies a la hora de sacar la chequera para auxiliar a su tejido productivo en 2020.

En este sentido, Economía y Hacienda han vuelto a emplazar a los gobiernos regionales a dar ayudas directas, tras apuntalar sus finanzas en 2020 y 2021. El año pasado, las comunidades recibieron de la financiación autonómica recursos como si no hubiera crisis, además de transferencias extraordinarias para hacer frente al alza del gasto debido a la pandemia. Este año también habrá barra libre: las autonomías tendrán unos 140.000 millones entre la financiación y el mayor margen de déficit, una cifra récord. Contarán, además, con el grueso del fondo europeo React-EU, que les brindará 8.000 millones en 2021 y 2.000 en 2022 para reforzar sanidad, educación y servicios sociales, pero que también podrán emplear para la reactivación económica. Y de todo esto el Gobierno les pide que saquen el dinero para las ayudas directas.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró la semana pasada que las comunidades dedicarán unos 2.000 millones de este fondo para auxiliar a las empresas. Así ya lo han dispuesto autonomías muy dependientes del turismo, además de líneas adicionales en sus presupuestos. Regiones del interior también usarán el mismo esquema, según ha podido saber EL PAÍS. Es el caso de Castilla-La Mancha, que destinará unos 155 millones del React-EU a transferencias para pymes y autónomos. O de Extremadura, que usará entre 50 y 60 millones de los 187 que tiene asignados para los sectores más afectados.

La terraza de un bar en Santiago de Compostela (Galicia), el pasado viernes. / LAVANDEIRA JR. (EFE)

Los planes de apoyo de las regiones

El grueso de las autonomías prevé dar ayudas directas, muchas con cargo al React-EU. Estas son algunas iniciativas:

Baleares. Es la autonomía más afectada por la crisis: su PIB cayó un 27% en 2020, según un análisis del Banco de España. El Govern ya desplegó ayudas directas en 2020. Para el primer trimestre de este año, ha diseñado un plan de 110 millones, 60 de ellos ayudas directas de hasta 6.000 euros por establecimiento, en colaboración con los municipios y los *consells* insulares.

Canarias. En 2020, dio 95 millones en ayudas directas. Hoy prevé aprobar nuevos apoyos a fondo perdido para pymes, autónomos y sector turístico por 165 millones, que planea endosar al React-EU, dejando abierta la posibilidad de convocar nuevas subvenciones.

Comunidad Valenciana. El reparto inicial de su asignación del React-EU incluye un paquete de ayudas directas de 430 millones para los negocios obligados a cerrar o limitar su actividad. El plan se añade a otras líneas existentes que se han ampliado en los presupuestos, y a los 223 millones en ayudas directas concedidos en 2020.

Asturias. Destinará unos 100 millones a ayudas directas gracias al fondo europeo. Las primeras convocatorias cuentan con 74 millones para turismo, hostelería, comercio, cultura y deporte, con ayudas desde 1.500 hasta 9.000 euros por profesional o establecimiento.

Cantabria. El grueso de su asignación del React-EU irá a sanidad y educación, pero habrá ayudas para agencias de viajes, innovación y digitalización.

Madrid, Cataluña y Andalucía. Son las regiones que más dinero recibirán del React-EU, pero no detallan cómo lo emplearán. Madrid asegura que incluirá ayudas directas en sus presupuestos, que aún no ha aprobado, al igual que Cataluña.

Castilla y León. Ha anunciado 50 millones en ayudas directas a hostelería y turismo, pero no detalla cómo usará el React-EU, al igual que Navarra, La Rioja, Aragón o Murcia. Esta última dará 35 millones en ayudas directas a la hostelería.

Castilla-La Mancha. Usará 155 millones del React-EU para ayudas directas a pymes, micropymes y autónomos de los sectores más afectados. Extremadura dará entre 50 y 60 millones a los mismos sectores.

Pese a este esfuerzo, los responsables de las patronales del comercio y la hostelería argumentan que no será suficiente. "Se quedará muy corto si la mayor parte del plan son quitas o más financiación y solo son 2.000 millones en ayudas directas", sostiene José Luis Yzuel, presidente de la patronal Hostelería de España. A lo que Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio, añade: "El comercio minorista está al límite, pero no por problemas de financiación, sino por problemas de liquidez. No hay consumo, no hay ingresos, seguimos con restricciones y con costes fijos que hacer frente cada mes. Por eso hacen falta ayudas para ya, no financiación para el próximo año". Situación que se repite en empresas turísticas, bares y restaurantes.

Malestar

La música que llega desde las comunidades tampoco es más optimista. Se muestran prudentes, a la espera de conocer el detalle del plan. Pero es evidente el malestar generado desde final de año en autonomías tanto del PSOE como del PP al recaer en los Gobiernos regionales toda la presión del diseño y pago de las ayudas directas. Ni siquiera la posibilidad de tirar de fondos comunitarios parece aliviar las tiranteces. "No se ha hecho un reparto del dinero del React-EU en función de la importancia y la caída del PIB turístico, los criterios no están ajustados para que demos ese apoyo. Para nosotros es un drama", lamenta el consejero de Turismo de una autonomía cuyo motor económico es ese sector.

También hay diferencias con la forma de diseñar el nuevo paquete y la comunicación con las autonomías. Las regiones del PP se quejan por no haber sido consultadas sobre el reparto del React-EU —Hacienda empleó los mismos criterios usados por la UE para asignarlo a los Estados: caída del PIB y paro—. "Todos estamos dando ayudas, pero son insuficientes para las pérdidas de los sectores más afectados", dice el consejero de Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. Javier Fernández-Lasquetty, su homólogo en la Comunidad de Madrid, añade: "El Gobierno quiso dar cifras muy abultadas de ayudas desde el inicio de la pandemia. Pero no se detuvo a pensar en cómo de eficaces eran".

Así, el último anuncio del Gobierno crea tanta expectación como escepticismo. Los antecedentes no invitan al optimismo: en la parte final de 2020 ya se anunciaron a bombo y platillo otros planes de rescate que, a la postre, resultaron insuficientes. Y la precipitación al darlos a conocer generó además unas expectativas en las empresas que la realidad de las cuentas públicas no podía asumir. En esta ocasión, la historia amenaza con repetirse.

Zoreda, del *lobby* turístico Exceltur, echa más leña al fuego en el pulso autonomías y Gobierno central: "Si son las comunidades las que tienen que dar las ayudas directas, espero que el Gobierno ponga a su disposición una partida excepcional para atender estas necesidades. Con lo que ya tienen no será suficiente". Las regiones cruzan los dedos para que así sea.

EL PAÍS
El País
España
01/03/21
Pr: Diaria
Tirada: 148.988
Dif: 103.021
Cod: 137417531
Pagina: 41
Secc: ECONOMÍA Valor: 42.961,37 € Area (cm2): 636,3 Ocupac: 67,34 % Doc: 1/1 Autor: DAVID FERNÁNDEZ, Madrid Las empresas esp Num. Lec: 859000

Las empresas del Ibex mantienen su deuda a raya pese a la pandemia

DAVID FERNÁNDEZ, **Madrid**

Las empresas españolas cotizadas sufrieron en 2020 un año para olvidar, con pérdidas millonarias. Pero pesar de la caída de las ventas y del menor resultado de explotación, las compañías del Ibex 35 lograron mantener a raya su balance. En concreto, la deuda financiera neta agregada se situó a 31 de diciembre en 157.899 millones de euros, un 1,1% menos que en 2019. En cambio, el ratio de apalancamiento, debido a la menor generación de flujo de caja, aumentó.

Cuando llegó la Gran Recesión, los grupos cotizados españoles estaban muy endeudados, lo que redujo bastante su margen de maniobra para capear la crisis que empezó en EE UU en 2007 con las hipotecas basura. Accionistas, bancos de inversión y agencias de calificación de riesgos presionaron entonces para que se produjera una rápida reducción de los compromisos. En esta crisis, provocada por los estragos económicos del coronavirus, las grandes empresas españolas parecen haber aprendido la lección y afrontan las turbulencias con una mayor disciplina financiera.

Las desinversiones, el ahorro de costes o el uso de otras vías para captar recursos como las ampliaciones de capital permitieron a los grupos del Ibex (sin incluir bancos ni aseguradoras) concluir 2020 con una deuda financiera neta agregada de 157.899 millones, es decir, 1.746 millones por debajo de la que tenían un año antes. La tendencia a aligerar el balance fue bastante generalizada, con un total de 14 compañías que llegaron al final del curso con una deuda menor a la de 2019.

En términos porcentuales, ArcelorMittal fue la compañía del Ibex que más se afanó en rebajar su balance. En concreto, el gigante siderúrgico logró recortar su deuda un 31%, dejándola en 5.245 millones. También fue significativa la caída en Repsol. El grupo petrolero tenía a 31 de diciembre pasado una deuda de 3.042 millones, un 28% por debajo de la cifra de un año antes.

En el lado opuesto, la empresa del Ibex que más incrementó sus compromisos fue ACS. El grupo constructor y de servicios presidido por Florentino Pérez, que había hecho un esfuerzo en los últimos años para dejar su deuda financiera casi a cero (54 millones en 2019) elevó sus compromisos hasta situarlos en 1.820 millones. Otro repunte importante (65,6%) lo experimentó Cellnex. La empresa de infraestructuras de telecomunicaciones está en plena expansión con la compra de numerosos activos y ya tiene una deuda de 6.500 millones.

El sector turístico, ahogado por el cierre de fronteras y la ausencia de viajeros, también tuvo que echar mano de los préstamos para sobrevivir. Por eso, dos de los representantes de esta industria en el Ibex destacaron también por el incremento de su balance. En el caso de Meliá Hotels, la deuda subió un 28% hasta los 2.603 millones. En el caso de IAG, grupo matriz de Iberia, el nivel de endeudamiento creció un 29% hasta los 9.762 millones. Amadeus, cuya actividad principal es ser una central de reservas de viajes, también echó mano de los créditos y elevó su deuda un 11,4%, dejándola en 3.074 millones.

En términos absolutos, la empresa que más deuda tiene dentro del selectivo es Telefónica con 35.228 millones (sin contar arrendamientos), un 6,7% menos que en 2019. Con motivo de la presentación de resultados, la operadora anunció un recorte del 25% en el dividendo para 2021. En noviembre pasado, la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's rebajó el *rating* de Telefónica por el impacto de la pandemia y la debilidad de las divisas en las que opera. La empresa presidida por José María Álvarez-Pallete prevé llevar la deuda a 26.000 millones una vez cerradas la fusión de 02 y Virgin Media y la venta de las torres de Telxius.

Tras Telefónica, la empresa que presenta un balance más voluminoso es Iberdrola. A pesar de haberla reducido un 6,4% durante 2020 gracias en buena medida a la desinversión de su participación en Siemens Gamesa, la deuda del grupo eléctrico suma 35.142 millones. La compañía dirigida por Ignacio Sánchez Galán tiene el 71% de sus compromisos a tipo fijo o con coberturas, y el plazo medio de sus vencimientos es a siete años.

El caso de Inditex

En el Ibex 35 solo hay dos empresas que tengan caja neta (lo contrario a la deuda). El caso más destacado es el de Inditex, con una posición de tesorería de 8.265 millones. Esta cifra corresponde a la situación del 31 de octubre pasado, pues el grupo textil tiene un año fiscal irregular y aún no ha presentado sus cuentas anuales. También presenta posición de caja neta Pharma Mar. La farmacéutica gallega ha pasado de tener una deuda de 60,8 millones en 2019 a una situación de tesorería positiva por valor de 163 millones.

Aunque la reducción de la deuda haya sido la tónica habitual entre los grandes grupos, lo cierto es que no ha servido para reducir, en la mayoría de los casos, el apalancamiento. Este ratio, que indica la capacidad de las compañías para hacer frente a sus compromisos, compara el endeudamiento con la generación de caja o Ebitda. En 2020, debido al parón económico provocado por la pandemia, la capacidad de las compañías para generar recursos fue menor, lo que provocó ese mayor apalancamiento. Es previsible que a medida que la actividad económica repunte con la llegada de las vacunas, las empresas tengan más capacidad de lograr liquidez y reduzcan su apalancamiento.

Endeudamiento de las empresas del Ibex 35

Cifras en millones de euros en empresas no financieras

	En 2020	En 2019	Var. neta	Var. en %
Cellnex	6.500	3.926	2.574	65,6
IAG	9.762	7.571	2.191	28,9
ACS	1.820	54	1.766	3.270,4
Siemens Gamesa	49	-863	912	-105,7
Meliá Hotels	2.603	2.028	575	28,4
Enagás	4.288	3.755	535	14,2
Endesa	6.899	6.377	522	8,2
Aena	6.540	6.200	340	5,5
Amedeus	3.074	2.758	316	11,4
Acerinox	772	495	277	56,0
Merlin	5.268	5.182	86	1,7
Red Eléctrica	6.113	6.038	75	1,3
Cie Automotive	1.594	1.522	72	4,7
Solaria	251	185	66	35,5
Viscofán	82	89	-7	-7,8
Grifols	5.714	5.725	-11	-0,2
Inm. Colonial	4.582	4.604	-22	-0,5
Almirall	393	455	-63	-13,7
Indra	481	552	-71	-12,9
Ferrovial	2.541	2.957	-416	-14,1
Acciona	4.733	5.317	-584	-11,0
Repsol	3.042	4.220	-1.178	-27,9
Naturgy	13.612	15.268	-1.656	-10,9
ArcelorMittal	5.245	7.622	-2.377	-31,2
Iberdrola	35.142	37.537	-2.395	-6,4
Telefónica**	35.228	37.744	-2.516	-6,7
Inditex*	-8.265	-7.734	-531	6,9
Pharma Mar*	-164	61	-224	--
Total Ibex 35	**157.899**	**159.646**	**-1.746**	**-1,1**

*Inditex y Pharma Mar tienen una posición de caja positiva. Los datos de Inditex son a 31 de octubre. **La deuda de Telefónica no incluye los arrendamientos

Fuente: Empresas, CNMV y elaboración propia. EL PAÍS

El BCE contribuye a la financiación barata

Las compañías españolas se encuentran ahora menos endeudadas que cuando estalló la Gran Recesión. Además, cuentan con un gran apoyo que no tenían hace una década: el del Banco Central Europeo (BCE). Al mismo tiempo que compra a manos llenas deuda pública de los Estados, el organismo que preside Christine Lagarde acude de forma regular a las emisiones de bonos que hacen los grupos cotizados. La financiación en el mercado de las empresas con una nota mínima de BBB-, el umbral que separa el grado de inversión del bono basura por alguna de las cuatro grandes agencias de calificación —S&P, Moody's, Fitch y DBRS—, cuenta con este sostén del BCE, que desplegó su cañón de liquidez tras estallar la crisis del coronavirus en marzo de 2020. El giro estratégico de Fráncfort también ha hecho caer en picado los costes de financiación corporativos gracias a su política de mantener los tipos de interés al 0%.

elPeriódico
El Periódico
España
01/03/21
Pr: Diaria
Tirada: 39.453
Dif: 31.028
Cod: 137415556
Pagina: 17
Secc: ECONOMÍA Valor: 23.608,85 € Area (cm2): 559,9 Ocupac: 65,87 % Doc: 1/1 Autor: GABRIEL UBIETO Barcelona Num. Lec: 287000

Estrategia Europa 2020

El covid agrava el suspenso español en los objetivos de empleo de la UE

España llegó a la pandemia con los deberes todavía pendientes y una tasa de paro y un abandono escolar elevados

GABRIEL UBIETO
Barcelona

La pandemia ha sido un muy grave imprevisto, pero España ya no llegaba con los deberes hechos en materia de empleo. El Gobierno español no ha cumplido con los compromisos adquiridos con la Unión Europea (UE) para la Estrategia Europa 2020. El Ejecutivo no ha logrado llegar a 2020 con el 75% de población empleada, bajar el abandono escolar por debajo del 10% y reducir la pobreza por debajo de los 20 millones de personas, tal como refleja el informe elaborado por el Ministerio de Trabajo.

La Estrategia Europa 2020 es un marco de referencia al que se acogen los diferentes estados miembros de la UE para coordinar sus políticas económicas. Cada uno se marca sus propios objetivos para orientar sus políticas públicas y revertir los déficits históricos que arrastra cada país. Estos los hizo suyos José Luis Rodríguez Zapatero en su última legislatura. Y España, tras la *era Rajoy* y ahora en la incipiente de Pedro Sánchez, no ha cumplido con lo firmado. El paro es la gran asignatura pendiente del mercado laboral español y, pese a que la pandemia ha hecho sangre de esa herida, los datos precovid estaban todavía lejos del aprobado.

España empezaba 2020 con una tasa de empleo del 68% entre las personas de 20 a 64 años. Ese 32% restante son personas en paro o inactivas, es decir, que ni trabajan ni buscan trabajo, ya sea por desánimo, problemas familiares u otros motivos. La tendencia era al alza y el nivel de ocupación ya superaba los índices previos a la crisis financiera del 2008.

No obstante, todavía no alcanzaba ese 75% fijado como objetivo y, tras el mazazo sin precedentes de la pandemia, los indicadores volvieron a hundirse. La fragilidad del mercado laboral español ante las crisis quedó reflejada cuando en marzo del año pasado se perdieron en 15 días más de 800.000 ocupados. La tasa de empleo finalmente cerró 2020 en el 65,7%, el nivel más bajo desde 2017 y 10 puntos por debajo del compromiso firmado. Los altos índices de paro entre los jóvenes, las mujeres o los mayores de 55 años lastran el balance, del que solo se salvan los trabajadores con alta cualificación, entre los que las tasas de empleo son del 78,4%.

Ferran Nadeu

Un joven frente al bar Lockdown («confinamiento» en inglés) del Raval, el pasado 23 de octubre.

El Gobierno apuesta por reformar las políticas de empleo y los ertes para revertir los déficits históricos del mercado laboral

Dos reformas clave en este aspecto envió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para paliar estos déficits históricos. Por un lado, la modernización de las políticas activas de empleo. La Airef ha criticado el actual diseño, considerando que la falta de concreción hace ineficiente el gasto. Por otro lado, la estabilización de un nuevo modelo de ertes, para evitar que la primera reacción del empresario sea recurrir al despido.

Abandono escolar y pobreza

Así como en términos de empleo la pandemia ha tenido un impacto directo y notable, el virus no ha lastrado la tendencia reductora del abandono escolar prematuro. No obstante, la nota todavía no da para el aprobado. En 2019 la tasa era del 17,3%, a 2,3 puntos del compromiso del 15% fijado para 2020. Entre las mujeres, la tendencia al abandono es menor, del 13%, frente al 21,4% de los hombres. En la UE la tasa media es del 10,2%.

La gran apuesta para cumplir con la tercera asignatura que revisa Europa es el nuevo Ingreso Mínimo Vital. Este, en fase de despliegue, pretende reducir los índices de pobreza en España. Según los últimos datos de 2019, uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de pobreza, una cifra con pocas variaciones en la última década. ■

elPeriódico
El Periódico
España
01/03/21
Pr: Diaria
Tirada: 39.453
Dif: 31.028
Cod: 137415603
Pagina: 16
Secc: ECONOMÍA Valor: 33.777,96 € Area (cm2): 805,9 Ocupac: 94,24 % Doc: 1/1 Autor: SARA LEDO Madrid Num. Lec: 287000

Sector eléctrico

Ebullición de salidas a bolsa de compañías de energías renovables

La inmensa liquidez que hay en los mercados y el auge de las energías limpias impulsado por los fondos europeos aceleran las salidas a los mercados de las empresas verdes en España

SARA LEDO
Madrid

Las renovables viven un momento de ebullición en España. A la llegada de grandes inversores, como la empresa estatal china Three Gorges, que ha creado una filial española tras comprar plantas solares, o el furor de los fondos de inversión con el ojo puesto en compañías *verdes*, se une una oleada de anuncios de salidas a bolsa de compañías de energía renovable. Este *boom* surge al calor de la gran liquidez que hay en los mercados y el hecho de que el sector sea uno de los más beneficiados por los fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea.

Repsol fue una de las primeras en anunciar a bombo y platillo sus intenciones de sacar a bolsa o buscar un compañero de baile para impulsar el crecimiento de su filial de energías renovables en el mes de octubre. Y hace una semana lo volvía a reiterar su consejero delegado, Josu Jon Imaz. Justo el mismo día que Acciona anunciaba que está estudiando una posible salida a cotización de su negocio *verde*, que cuenta con una cartera de proyectos en desarrollo valorada en 4.000 millones de euros.

La colocación de Acciona se llevará a cabo en el primer semestre de este año, según dijo su consejero delegado, José Manuel Entrecanales, tras el anuncio. También Capital Energy fantasea con poner un pie en el parqué de cara a la primavera. La energética, que se alzó ganadora de la subasta de renovables celebrada en el mes de enero, ha contratado ya a Goldman Sachs y UBS como colocadores.

Operador de referencia

La compañía de Jesús Martín Buezas aspira a convertirse en un operador de referencia en el mercado español con una cartera de proyectos de alrededor de 38 gigavatios (GW) de potencia. Es evidente que necesita financiación y, aunque reconoce que está analizando distintos instrumentos a corto, medio y largo plazo, la salida a bolsa figura entre sus prioridades, según fuentes del mercado. Pero también suenan otros nombres como Opdenergy, Factorenergía o Gransolar.

«Las salidas a bolsa les permite acceder a mayor financiación y tener más visibilidad de cara a nuevos proyectos», explica el analista de XTB, Joaquín Robles. Aunque ya han empezado a salir los primeros críticos, como el consejero delegado de Endesa, José Bogas, que sugirió la semana pasada la posibilidad de que se estuviera generando una «burbuja» en el sector con compañías que «tratan de extraer valor a su cartera de clientes para después venderla o sacarla a bolsa». Alguna de las compañías que prevé salir a bolsa dice no darse por aludida y reconoce que este podría ser el caso de quienes quieran sacar dinero para reducir su endeudamiento, pero no de quienes buscan crecer.

Con todo, este «aluvión» bursátil no es único de España, sino mundial. «Dependiendo de las fortalezas del país se da en una industria o en otra. En EEUU ocurre con las tecnológicas y farmacéuticas y en España con las renovables», explica la socia responsable de OPV de EY, Rosa María Orozco.

En los últimos tres años ha habido solo dos estrenos bursátiles en España y han sido de empresas renovables. En 2018 debutó la empresa de placas Solarpack y en 2020, Soltec. «Buena parte de las salidas a bolsa recientes o en ejecución son de sectores *growth* (renovables, *fintech*, tecnológicas en general) que ofrecen una promesa de crecimiento (y rentabilidad) superior a la de los negocios más tradicionales, por lo que esta tendencia está más focalizada de lo que podría parecer», explica la socia responsable de Mercados de Capitales de KPMG en España, Noelle Cajigas. El parqué español cuenta, además, con otras compañías verdes como Grenergy, Audax y Solaria. ■

Efe

Planta fotovoltaica de El Romero, en Vallenar, en pleno desierto chileno de Atacama, construida por la multinacional española Acciona.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Bruselas se pronuncia el miércoles sobre el impuesto español a la generación eléctrica

▶ El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (UE) se pronunciará este miércoles sobre el impuesto del 7% que grava la producción de energía eléctrica para responder a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tras una demanda de la empresa Promociones Oliva Park.

▶ Entre las principales dudas destaca que pese a que su regulación es de impuesto directo, actúa como indirecto. Además, que aparece como impuesto medioambiental y su fin es esencialmente recaudatorio; perjudica a los productores renovables y realiza una discriminación del mercado interior europeo, según la empresa demandante.

▶ El Gobierno del PP creó este impuesto en 2012 para acabar con el déficit acumulado del sistema eléctrico, que llegó a alcanzar una deuda de 27.000 millones de euros. La tasa generó desde sus inicios malestar entre grandes eléctricas y pequeños productores. El caso de Oliva Park actúa como «pleito testigo» ante las más de 2.000 demandas que hay, según el abogado José García Roig, de Martin Queralt Abogados.

Expansión
Expansión
España
01/03/21
Pr: Diaria
Tirada: 27.645
Dif: 18.608
Cod: 137414462
Pagina: 18
Secc: POLÍTICA - ECO Valor: 21.258,97 € Area (cm2): 797,1 Ocupac: 92,03 % Doc: 1/2 Autor: Mercedes Serraller. Madrid Num. Lec: 117000

"Hay una inseguridad jurídica total en torno a la prohibición de despedir"

ENTREVISTA ÍÑIGO SAGARDOY Presidente de Sagardoy Abogados/ Avisa de que el Decreto que pretende prohibir el despido no es claro y reclama flexibilidad en un contexto en el que las iniciativas temporales contra la crisis del Covid se han quedado obsoletas.

Mercedes Serraller. Madrid

Íñigo Sagardoy (Madrid, 1968), presidente de Sagardoy Abogados y catedrático de Derecho del Trabajo, advierte de que la norma que pretende prohibir el despido procedente mientras dure la crisis pandémica no es clara y está generando inseguridad jurídica. Cuando el despacho celebra su 40 aniversario, vinculado a la llegada de la democracia y del Estatuto de los Trabajadores, reclama flexibilidad para las empresas en un contexto en el que las iniciativas laborales contra la crisis del Covid se han quedado obsoletas.

– La ministra de Trabajo anunció que habían aprobado un decreto que prohibía el despido. ¿Está prohibido?

El decreto genera dos obligaciones que se han interpretado de forma muy absoluta: la prohibición de despedir hasta el fin del estado de alarma y el mantenimiento de empleo hasta seis meses después de un ERTE. No son principios absolutos y sin matices, lo vemos en los casos que llegan a los tribunales, hay sentencias de todo tipo. Se ha pecado de inseguridad jurídica, estos principios no están recogidos de forma muy taxativa. Hay una inseguridad jurídica total en torno a esta norma. Si la empresa tenía una situación crítica antes del coronavirus y se ha agravado, la pandemia es una causa indirecta, y lo hace de buena fe, puede utilizar los mecanismos que da la ley para despedir. Además, la interpretación de cualquier ley por los tribunales se pone en el contexto de la realidad en que se aplica. Llevar al máximo la prohibición puede conducir a una mayor crisis empresarial y dificultar la salida. Hay muchas empresas que ante una prohibición de despedir, se van al concurso de acreedores, y si no pueden flexibilizar sus recursos humanos, van a retraer la contratación. ¿Cómo van a contratar masivamente ahora o cuando mejoren las cosas si tienen ese hándicap? Hay que evitar la inseguridad jurídica, genera incertidumbre empresarial, más paro y menos creación de empleo.

– En los despidos individuales hay sentencias de todo tipo. Ya en los ERE también, los hay ajustados a derecho por pérdida de contrata. ¿Qué le parece?

Totalmente pertinente. La prohibición es matizable. Si se ve que la causa es real, seria, que no tiene que ver con el Covid, va a haber despidos ajustados a derecho, lógicamente el coronavirus puede incidir y hacer que una empresa vaya peor, pero si la causa principal directa no es el coronavirus, los tribunales lo avalan. Cada caso es un mundo y la última palabra la tiene el Supremo.

– ¿Qué está generando la obligación de mantener empleo hasta seis meses acabado el ERTE? CEOE pedía aliviar esta restricción

Claro, un ERTE no se hace de forma caprichosa. Hay dudas sobre la interpretación, si despides a un solo trabajador, si hay que devolver las cotizaciones de éste o de todos, no está claro; hay sentencias, sigue la inseguridad, se ha dejado también un poco en manos de los tribunales. No es bueno dejar de forma permanente una medida temporal, estás haciendo una burbuja, una protección no real. Hay empresas que no necesitan a los trabajadores en ERTE.

– ¿Está agotada la fórmula de los ERTE?

Sí, la única salida es facilitarla a futuro y también la modificación de las condiciones de trabajo, todo el abanico, para que las empresas en situación crítica escojan instrumentos menos traumáticos que los despidos. Sin flexibilidad, las empresas sólo tienen el despido o la suspensión de pagos. Lo que dice Europa: flexiseguridad, que se inició en la reforma laboral de 2012.

– ¿Qué efectos está teniendo la prohibición de despedir?

Las empresas ya están haciendo planteamientos de reestructuraciones, es mejor el remedio que la enfermedad, deciden hacer ahora una reestructuración parcial antes que esperar a una situación peor. El problema de fondo es que todas estas medidas, los ERTE, estaban pensadas para una situación coyuntural, y ya ha pasado un año, para la empresa y la economía, un periodo larguísimo, y las medidas coyunturales, que estaban bien pensadas, incluso algunas limitaciones al despido, ya no sirven para la situación actual, que es estructural. Lo que hay que pensar ahora no es tanto si seguimos prohibiendo despedir, prorrogando los ERTE. España va a salir muy tocada de la crisis.

– ¿En qué medidas piensa?

Hay que reformar el mercado de trabajo para facilitar la contratación y flexibilizar, no es el momento de mirar atrás y volver a normas laborales anteriores a 2021, vamos a buscar medidas de flexibilidad temporal para salvar empresas.

– ¿Cuáles?

Ayudas directas y la creación de un contrato de recuperación, de un año, para el lanzamiento de la actividad.

– ¿Y facilitar el despido?

No. Pero no impedirlo, no poner obstáculos. Un reciente estudio de McKinsey concluye que en España la recuperación del empleo va a ser más lenta que en la UE, en 2024, y en Europa, en 2022. Tenemos que animar a las empresas a contratar: dar ayudas directas. Hay una propuesta del Gobierno de reducir las modalidades de contratos muy acertada. Va a haber una bolsa de trabajadores que van a necesitar recualificación por la pandemia, y ahí los fondos europeos se pueden aprovechar. Y otra medida es atraer talento internacional: España debería ser un polo mundial de atracción de teletrabajadores, que generaría riqueza y empleo, para lo que hay que acometer cambios importantes en inmigración, quitar trabas y burocracia, con una serie de requisitos, claro, y hay que hacer cambios laborales y fiscales. Ahí tenemos una oportunidad espectacular que debemos luchar ya mismo.

– ¿Se está preparando una avalancha de ERE?

Muchas empresas están reflexionando sobre hacer un ERE, además de los que vemos en marcha y anunciados. Muchas, sobre todo las de sectores más dañados, como turismo u hostelería, están reflexionando.

– ¿Será una avalancha?

Hay mucha reflexión. Llevar a la ejecución no es tan fácil. 2021 es el año clave en cuanto a vacunación y reactivación económica. Si se retrasa mucho, veremos reestructuraciones; si vemos la luz al final del túnel, menos, aunque algunas no podrán aguantar.

– ¿A cuánto podrá llegar la tasa de paro?

No soy economista, pero el informe de McKinsey prevé que en 2021 será del 17,7%, tras un 16,2% en 2020, y en 2022, del 16,8%, y que en 2024 es cuando se llegará a una tasa similar a la de 2019, del 14,8%.

– Vamos por detrás del resto de Europa.

Sí, sí. En 2021, en Europa será del 9,8%, y se espera un 8% en los próximos años, mientras España seguirá todavía entre un 16,8 y un 14,8.

– ¿Puede tener la crisis efectos retardados como la de 2008 y llegar al 26%, a 6 millones de parados?

Todos los expertos dicen que si hay vacunación masiva y reactivación económica la crisis va a ser muchísimo más corta, con reactivación casi automática que desencadene el ciclo virtuoso de consumo y creación empleo, puede ser infinitamente más corta que la de 2008.

– Sin ciertas medidas aparte de la vacunación, ¿las empresas están abocadas a concursos y liquidaciones?

Sí, sobre todo pymes.

– ¿Qué efecto ha tenido la reforma laboral de 2012 en el empleo?

El gran mérito de la reforma laboral es que toda la regulación giraba en torno a la flexiseguridad. Se flexibilizaron los ERTE, que venían de antiguo. Se daban opciones a la empresa para que afrontara la crisis de forma distinta, que era tradicionalmente con despidos, se generaba una rotonda en la que la empresa tenía muchas salidas: modificar las condiciones de trabajo, derogar el convenio, hacer un convenio propio, un ERE, un ERTE... Ese fue el gran mérito y el gran valor de la reforma, flexibilidad y a la vez seguridad. No era una flexibilidad absoluta, había procedimientos tasados por la ley, controlados judicialmente. El concepto que se ha impuesto en Europa de la flexiseguridad

> "Los anuncios del Gobierno de contrarreforma laboral no animan la inversión y generan desconfianza"

JMCadenas

Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados.

> "Los ERTE están ya agotados, hay que buscar medidas de flexibilidad temporal para salvar empresas"

> "La reforma laboral del PP dio seguridad y flexibilidad a las empresas para reactivar su actividad"

Expansión
Expansión
España
01/03/21
Pr: Diaria
Tirada: 27.645
Dif: 18.608
Cod: 137414462
Pagina: 19
Secc: POLÍTICA - ECO Valor: 3.298,02 € Area (cm2): 123,7 Ocupac: 14,28 % Doc: 2/2 Autor: Mercedes Serraller. Madrid Num. Lec: 117000

> “Muchas empresas reflexionan hacer un ERE; Su ejecución dependerá de la vacunación, aunque algunas no aguantarán”

sirvió para generar confianza y, por lo tanto, empleo.

– El Gobierno ha dicho a Bruselas que va a dar prioridad al convenio sectorial frente al de empresa y volver a la ultraactividad.

Limitar la negociación colectiva cuando en España es muy madura no es el camino. Es cierto que ha habido malas prácticas, eso hay que controlarlo vía inspección de Trabajo o tribunales, pero no pueden suponer la eliminación de la negociación colectiva.

– También se plantea controlar la modificación de las condiciones de trabajo.

En un sistema de relaciones laborales moderno, no creo que sea la vía adecuada. Que no sea la ley la que cierre las puertas a que una empresa pueda adaptarse a una situación difícil. Es la alternativa ante otra peor, el despido.

– Se penalizarán los contratos temporales...

La pura penalización del temporal no tiene sentido, tiene que ir unida a un sistema de reducción de contratos. Si hay empresas que necesitan cubrir puestos temporales, no se les puede penalizar.

– La penalización de las contratas ha sido criticada por algunos laboralistas.

Hay que tener mucho cuidado, según cómo se regule puede penalizar mucho a la pyme.

– ¿Qué le parece la ley de ‘riders’? Muchos reclaman ser autónomos.

El modelo precisa de mucha flexibilidad. De ahí que ningún país haya optado por regularlo bajo el paraguas único de la laboralidad. Creo que el sistema de los países nórdicos, de opción entre régimen de autónomos o laboral, vía negociación colectiva, debería ser un buen ejemplo. Siempre con garantías de protección a los *riders*.

– ¿Qué impacto tienen estos anuncios sobre la inversión?

Si los anuncios van hacia la contrarreforma laboral, lógicamente no animan a la inversión, pero más que eso lo importante es la generación de desconfianza, la no generación de confianza de un marco estable. Si soy una empresa y quiero invertir en España y no sé si en los próximos meses va a cambiar la ley y va a entorpecer la creación de empleo, me lo pienso. La clave es la confianza y la seguridad jurídica, cuando se genera confianza, se genera inversión.

Expansión
Expansión
España
01/03/21
Pr: Diaria
Tirada: 27.645
Dif: 18.608
Cod: 137414524
Pagina: 15
Secc: FINANZAS (Banca) Valor: 14.978,35 € Area (cm2): 560,0 Ocupac: 64,84 % Doc: 1/1 Autor: POR DESCONTADO Salvador Arancibia Num. Lec: 117000

El indefinido paquete de ayudas de 11.000 millones de euros

POR DESCONTADO

Salvador Arancibia

Después de unas semanas de fuerte discusión interna dentro del Gobierno y de éste con el Banco de España y el sector financiero, el presidente, Pedro Sánchez, anunció el miércoles pasado en el Congreso que en las próximas semanas se aprobará un nuevo paquete de 11.000 millones de euros para ayudar a empresas y autónomos, en especial a los de los sectores del turismo, la hostelería y restauración y al pequeño comercio. El anuncio se quedó ahí, sin que nadie lo concretara más, posiblemente porque, aunque el principio está aceptado, la letra pequeña es la que queda por redactar y ya se sabe que el diablo está en los detalles.

La primera reacción de la oposición, a través de Pablo Casado, líder del PP, fue decir que el montante se queda corto porque se necesitan 50.000 millones, es decir, casi cinco veces más. Los 11.000 millones son, sin embargo, bastante más que los 8.000 millones que Unidas Podemos había señalado como necesarios. Otras fuentes, que suelen tener más cuidado con las cifras, dicen que, aunque "el importe se sitúa en la parte baja de la banda estimada, puede ser suficiente [si se acierta en los sectores y las empresas y autónomos a los que llegue] si se gasta bien".

La principal incógnita que queda por aclarar, por decidir, es en qué van a consistir esos 11.000 millones de euros. Si se trata de ayudas directas, de una condonación de préstamos, de aplazamientos en los pagos que los beneficiarios tengan pendientes con las administraciones públicas o en una mezcla de todo ello.

Marcha atrás

Inicialmente la vicepresidenta Nadia Calviño vino a identificar plenamente las ayudas con la puesta en marcha de un programa de quitas de los créditos dados por la banca con aval parcial del ICO (que adicionalmente permitiría que los bancos participaran de alguna forma en las ayudas), lo que fue contestado tanto por las autoridades monetarias como por el sector bancario, al entender que ello produciría una discriminación no justificada entre quienes habían acudido a estos préstamos y quienes no lo habían hecho, bien porque decidieran aguantar el tirón con sus reservas, bien endeudándose por otras vías.

"Lo importante es el sobreendeudamiento, no el origen del mismo, y la viabilidad futura de las empresas y de la actividad de los autónomos", se argumentó, y parece que Economía reconoció que era más lógico ese razonamiento.

La pandemia ha puesto contra las cuerdas a miles de pequeñas y medianas empresas.

No está claro si serán ayudas directas, condonaciones de préstamos, aplazamientos de pago o una mezcla de todo ello

Además se señaló que si se decidía una quita para los créditos avalados por el ICO de manera generalizada se produciría un 'efecto llamada' a impagar este tipo de préstamos, que provocaría una inseguridad jurídica perniciosa para la reputación de la economía nacional y del sector financiero en concreto al cambiar las reglas de juego. Además de aumentar la morosidad de la banca de forma innecesaria, porque los bancos deberían reclasificar no solo estos créditos sino todos los que tuvieran esos deudores por las exigencias de la actual normativa contable, y la constitución de elevadas provisiones que deteriorarían las cuentas de resultados de las entidades financieras.

Si el problema es el sobreendeudamiento de empresas (especialmente de las pequeñas) y autónomos y su viabilidad futura una vez vieran reducida una parte de esa deuda, lo primero que hay que definir es precisamente esa viabilidad, y se reconoce que quien mejor puede hacerlo son los bancos, que mantienen una relación cercana con esos empresarios y que, por lo tanto, no es aconsejable la adopción de medidas indiscriminadas sino el análisis individualizado de cada uno de ellos.

Puesta en práctica

Las próximas semanas serán cruciales para definir la distribución de esos 11.000 millones que el Estado está dispuesto a poner encima de la mesa. La idea inicial era que el Gobierno aprobara un Real Decreto con todo lo referido a este paquete a mediados de marzo, de forma que pudiera ponerse en marcha realmente a partir del mes de abril, una vez hubiera recibido el visto bueno de la Unión Europea.

Si finalmente una parte de esos 11.000 millones de euros se gastan en reducir deuda de empresas y autónomos con créditos ICO, la cifra final del paquete de ayudas crecerá en la medida en que los bancos también deberán reducir, en la proporción que les corresponda, esos créditos.

Pero lo deseable es que la mayor parte de esos 11.000 millones se gasten de otra manera que alivie con mayor intensidad la situación de los receptores de esos fondos. Porque los créditos ICO, inicialmente dados a cinco años de amortización y con uno de carencia, pueden ampliarse hasta a dos de carencia y ocho años de amortización, mediante la simple petición del deudor que el banco debe aceptar de forma obligatoria.

La forma que tomen las ayudas para el resto de empresas (sobre todo para las medianas, porque las grandes siguen teniendo el mecanismo del fondo constituido en la SEPI) parece algo menos complicado, entre otras cosas porque el número de compañías en este grupo es muy inferior al de las pequeñas y los autónomos.

En ese segmento de sociedades parece que en lo referente a la deuda se podría optar de manera muy generalizada por la transformación de los créditos en préstamos participativos que pueden en un momento dado convertirse en capital y que en todo caso no reciben el pago de intereses si la compañía no genera resultados positivos.

Expansión
Expansión
España
01/03/21
Pr: Diaria
Tirada: 27.645
Dif: 18.608
Cod: 137414518
Pagina: 21
Secc: POLÍTICA - ECO Valor: 21.774,23 € Area (cm2): 816,4 Ocupac: 94,26 % Doc: 1/1 Autor: Miguel Ángel Patiño. Madrid Num. Lec: 117000

Reino Unido busca 100.000 millones para 'resetear' su economía este año

TRAS COVID Y BREXIT/ Pasado mañana, el Gobierno presenta los Presupuestos, que todos piden que sean los de "la recuperación" y que prolonguen la ayuda estatal, que ya suma 280.000 millones de libras.

Crece la presión empresarial y política a favor de que sigan las ayudas estatales

Reino Unido ya ha destinado 280.000 millones a paliar la crisis, pero necesita más estímulos

Miguel Ángel Patiño. Madrid

El ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, tiene por delante esta semana lo que posiblemente van a ser los días más complicados desde que lleva en el cargo. Pasado mañana está previsto que presente los Presupuestos del Gobierno británico para el nuevo ejercicio. Serán sus segundos Presupuestos, pero esta vez están marcados por el Brexit y por el Covid.

Desde numerosos frentes, se está exigiendo al Gobierno de Boris Johnson que haga de los Presupuestos la gran herramienta para el relanzamiento económico del país, tras el duro impacto de la pandemia y un tortuoso comienzo del Brexit.

La separación de Reino Unido de la Unión Europea, efectiva desde el pasado día 1 de enero, está siendo más complicada y con más impacto negativo del que se podía prever.

Los Presupuestos deberán servir para *resetear* al completo la economía tras la "mayor crisis sufrida en 300 años por Reino Unido", según las palabras del propio Sunak. En más de una ocasión Sunak ha comparado la crisis económica del Covid con la que sufrió Reino Unido en el año 1709, cuando una ola de frío polar invadió el país.

UK Parliament

Boris Johnson se enfrenta esta semana a la presentación de los Presupuestos, claves para salir de la crisis.

Plan de estímulos

Distintas agrupaciones empresariales están pidiendo al Gobierno un plan de estímulos fiscales y de ayudas que como mínimo debería llegar a los 100.000 millones de libras (115.000 millones de euros) en los Presupuestos.

Reino Unido ya lleva acumulados 280.000 millones de libras (324.000 millones de euros) en gasto público para paliar el impacto de la pandemia, vía ayudas directas, créditos, subvenciones laborales y recortes de impuestos. Esto ha llevado el endeudamiento del país a su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial.

La Resolution Foundation, una agrupación que reúne a expertos financieros y de otras disciplinas de todo tipo de colores políticos, salió la pasada semana a escena diciendo que Sunak debería extender el apoyo de emergencia para empresas y trabajadores y anunciar una nueva ronda de medidas de estímulo para aliviar el desempleo, impulsar la inversión verde y ayudar a los empresarios.

Para la Resolution Foundation, los 100.000 millones de libras adicionales que necesita la economía de apoyo estatal en Reino Unido es asumible.

Comparación con EEUU

Sería una mínima parte del megaplan de estímulos que quiere implantar el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Los expertos recriminan a Boris Johnson que "mientras que el debate de Estados Unidos se ha centrado en cómo aumentar el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares del presidente Biden, el debate de Reino Unido se ha estancado en resolver cómo retirar el apoyo".

La pandemia ha durado más de lo previsto y a la extensión de la crisis económica, más allá del pasado ejercicio, se han sumado los contratiempos que están surgiendo con el Brexit, al que le parece salir una gotera cada día.

Cuando no son las exportaciones las que caen, son las importaciones las que se encarecen. Hay colectivos, como los pescadores escoceses, en pie de guerra. Numerosas empresas que antes tenían gran comercio eléctrico entre Reino Unido y la Unión Europea han dejado esas transacciones por las nuevas barreras burocráticas. Los expertos ahora instan a Sunak a que combine la extensión del apoyo existente con un nuevo plan de estímulos.

La Resolution Foundation recomienda destinar 27.000 millones de libras a un nuevo paquete de apoyo laboral y de formación a desempleados que han perdido el empleo durante la pandemia. También recomienda extender la ayuda extra de 20 libras semanales para los desempleados y asalariados con menores ingresos.

Por otra parte, insta a poner en marcha de forma urgente un programa de inversión en energías verdes de hasta 18.000 millones de libras y a lanzar otro plan de 30.000 millones de libras para extender el apoyo de emergencia existente a empresas.

Adicionalmente, recomienda un plan de 9.000 millones de libras para impulsar el comercio minorista. Según esta asociación las propuestas de reactivación de la economía no deberían bajar del 5% del PIB británico. Sería mucho más barato que el 9% que supone el plan de Biden en EEUU.

En algún momento, a futuro, es cierto que se necesitará aumentar los impuestos en el país a todos los niveles, para pagar el apoyo del Gobierno a la economía. Pero lo urgente ahora es salir del agujero, mucho mayor del que se preveía en el peor de los escenarios.

30.000 millones más

En el futuro, "se necesitarán alrededor de 30.000 millones de libras para equilibrar el presupuesto actual y crear un nuevo colchón fiscal que permita afrontar futuras recesiones", explican los expertos.

Mientras tanto, crece la tensión dentro de las filas del Partido Conservador, que es el que apoya a Boris Johnson. Algunos miembros han empezado a alertar de que estos Presupuestos van a marcar la agenda electoral, y pueden ser decisivos para revalidar o no el próximo mandato.

Editorial / Página 4

El 21 de junio, fecha clave para volver a la normalidad económica

Miguel Ángel Patiño. Madrid

El pasado lunes, el Gobierno de Boris Johnson anunció el calendario de desescalada del severo confinamiento sufrido por Reino Unido desde Navidad. Es el único país que ha establecido un calendario tan detallado. Habrá cuatro fases, pero la clave será el 21 de junio. Marca la vuelta a la normalidad en todos los sentidos, incluido el económico. Será el pistoletazo de salida para relanzar la economía del país.

El 8 de marzo reabrirán los colegios y se permitirá el deporte extraescolar al aire libre. Dos personas de hogares diferentes podrán reunirse en espacios públicos exteriores. Las residencias de ancianos permitirán sólo un visitante.

Desde el 29 de marzo, seis personas de hasta seis hogares distintos, o dos hogares de cualquier tamaño, podrán reunirse al aire libre, en espacios públicos o jardines privados. Se reabrirán las instalaciones deportivas al aire libre, como campos de golf y canchas de baloncesto, y se permitirá el deporte en equipo organizado al descubierto.

Reino Unido, a diferencia de otros países, ha fijado un calendario de vuelta a la actividad

A partir del 12 de abril se reabrirán los comercios no esenciales, peluquerías, salones de belleza, bibliotecas y museos, así como recintos al aire libre, incluidas terrazas de restaurantes y bares. Se permitirá la asistencia de 30 personas a los funerales y de 15 a bodas y velatorios y se reabrirán los camping y locales vacacionales.

A partir del 17 de mayo, hasta 30 personas de diferentes hogares podrán congregarse en espacios exteriores. Si todo va bien, podrían empezar a autorizarse los viajes internacionales y vacaciones en el extranjero. Se permitirá la entrada de 1.000 personas, o la mitad de la capacidad (lo que sea inferior) en los recintos deportivos cerrados, y en los abiertos el límite será de 4.000. En los grandes estadios, el máximo será de 10.000 personas o la mitad de la capacidad.

Desde el 21 de junio se levantarán todas las restricciones de contacto social y se reabrirán todos los sectores de la economía aún cerrados, como las discotecas. Se permitirán eventos multitudinarios.

LA RAZÓN
La Razón
España
01/03/21
Pr: Diaria
Tirada: 75.013
Dif: 51.585
Cod: 137417538
Pagina: 26
Secc: ECONOMÍA Valor: 31.630,73 € Area (cm2): 808,5 Ocupac: 93,29 % Doc: 1/2 Autor: Inmaculada González de Molina Num. Lec: 186000

11.000 millones a condonar créditos y ayudas directas

El Gobierno solo ayudará a pymes solventes y dejará «morir» a las insolventes

Inmaculada González de Molina

Un año después de que el Gobierno decidiera echar el cierre a la economía española para combatir la pandemia del coronovarius, la Vicepresidencia de Asuntos Económicos trabaja ahora contrarreloj para rematar el borrador del real decreto ley que establece cómo, a quién y cuándo entrará en vigor el nuevo paquete de ayudas a pymes y a autónomos por importe de 11.000 millones, que el pasado miércoles anunció el presidente Sánchez y que, previsiblemente, aprobará el Consejo de Ministros el próximo 16 de marzo, aseguran a este diario fuentes monclovitas. A expensas del cierre definitivo de la redacción del decreto, el Gobierno apuesta por destinar una parte de estas ayudas a condonaciones de los créditos de la línea avala por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otra parte a ayudas directas a pymes y a autónomos de los sectores más afectados por la crisis económica, como consecuencia de las restricciones decretadas por el Ejecutivo para frenar el avance del covid-19, según confirman a LA RAZÓN fuentes gubernamentales. Entre estos sectores, figura en un lugar destacado el turismo, el comercio y la restauración

En estos momentos, el debate existente en el seno del Gobierno consiste en buscar la fórmula idónea que armonice la no exclusión de estas ayudas de las pymes que no solicitaron, en su día «por el motivo que fuera», una inyección de liquidez mediante la línea de avales del ICO con edificar unos cimientos que eviten convertir la crisis económica en una financiera, a imagen y semejanza de la anterior de 2008. Otras fuentes gubernamentales consultadas por este diario aseguran que la solución que ha encontrado Nadia Calviño para hacer converger estas dos líneas de actuación pasa por combinar ambas. Por eso baraja dedicar una parte de los 11.000 millones a ayudas directas a fondo perdido. Concretamente, estudia destinar hasta el 25% (2.750 millones) del total de la nueva inyección de capital que realizara el Ejecutivo a ayudas directas a las pymes y a autónomos, que, en principio, se plantean a fondo perdido. Las condiciones que impondrá Economía, en este caso, son que este colectivo afectado por el covid-19 no haya accedido a la línea de financiación del ICO y que demuestre que sus problemas de liquidez son temporales y achacables, por tanto, a las limitaciones de movilidad de la población decididas por el Gobierno.

De esa manera, seguirá la estela de los Ejecutivos autonómicos, que ya cuentan en sus arcas con los 8.000 de los 12.000 millones de euros que corresponden a España por el Fondo React-EU y que dedicarán de esta cuantía 2.000 millones a ayudas directas a autónomos y a pymes afectados por la pandemia. Por tanto, a estos 2.000 millones en ayudas directas, que destinarán las autonomías a pymes y a autónomos del turismo, comercio y hostelería, hay que sumar los 2.750 millones, correspondientes al 25% de los 11.000 millones, que dedicará el Ejecutivo de Sánchez a ayudas directas para salvar a las pymes y a los autónomos de la quiebra.

No obstante, esta cifra de ayudas directas, que rondará los 5.000 millones entre las partidas de los Gobiernos central y autonómicos, se sitúa muy por debajo de la demanda por la oposición. Los populares cuantifica las necesidades de estos sectores más azotados por la crisis en 50.000 millones, casi cinco veces más que los cálculos efectuados por Sánchez. Mientras, sólo la hostelería y el comercio solicitan al Gobierno desde hace semanas ayudas directas por un importe de 12.000 millones.

Condonaciones

Economía estudia destinar el resto de los 11.000 millones de ayudas hasta un total de 8.250 millones de euros a condonar la parte del 20% de los préstamos concedidos por las entidades financieras, avalados en un 80% por el ICO, a pymes y a autónomos por un montante superior a los 70.000 millones de un total que sobrepasa los 100.000 millones. De los 70.000 millones destinados a pymes y a autónomos, el sistema financiero ha aportado más de 14.000 millones, cuantía que sería objeto de condonación en determinados supuestos.

Así, Calviño actuará en una doble vertiente. Por un lado, rescatará a las pymes que no demandaron un préstamo del ICO, pero que ahora necesitan un salvavidas para garantizar su supervivencia, y, por otro, socorrerá a aquellas que sí lo solicitaron, pero que igualmente están asfixiadas por la paralización de la actividad. Y es que, según fuentes gubernamentales, la vicepresidenta Calviño está muy preocupada y ocupada en evitar que la crisis actual se convierta en una financiera. De ahí esta quita en la parte de la banca.

La condición sine qua non que impondrá Economía para poder acceder a estas ayudas es que se demuestre que la empresa no es insolvente. El Ejecutivo apuesta por optimizar los recursos públicos y destinarlos sólo a las empresas que, fruto de la pandemia, hayan incurrido en un endeudamiento adicional que, unido a la caída de la actividad, les haya generado un deterioro patrimonial, cuando previamente eran negocios viables y en sectores rentables. Por tanto, se trata de destinar los recursos públicos a evitar que ese deterioro patrimonial de empresas viables les conduzca al cierre. Es decir, el Gobierno dejará «morir» a las empresas que son inviables y que, por tanto, no tienen futuro. «Se trata de apartar del cesto las manzanas podridas, con el fin de optimizar los recursos públicos al máximo», aseguran fuentes gubernamentales. Por eso, Economía, junto con el Banco de España y con las entidades financieras, está trazando un mapa identificativo de las empresas que son viables, pese a que ahora atraviesen por apuros económicos, de las que están heridas de muerte. Para este análisis, el Gobierno está utilizando «una herramienta objetiva»: el estudio ya realizado por el ICO para conceder su línea de créditos

Con el diseño de estas ayudas, Nadia Calviño dará su brazo a torcer. La vicepresidenta se ha mostrado siempre contraria a destinar ayudas directas a fondo perdido por su impacto en la deuda pública y en el déficit presupuestario. Sin embargo, estas ayudas de 11.000 millones de euros tendrá su fiel reflejo en el déficit público, que se disparará este año del 7,7% previsto hasta el 8,7% del PIB. Mientras, fuentes de Economía descartan que estas ayudas se traduzcan en un alza de la deuda pública por la reprogramación de deuda realizada por el Tesoro público con una emisión en 2020 inferior en 10.000 millones de euros al montante global previsto, cuantía similar a las nuevas ayudas.

Calviño quiere optimizar los recursos a su disposición y por eso sólo ayudará a firmas solventes

LAS CLAVES

El Consejo de Ministros aprobará, previsiblemente, el real decreto ley que regula este nuevo paquete de ayudas por importe de 11.000 millones de euros el próximo 16 de marzo.

Estas nuevas ayudas combinarán la condonación de parte de los créditos ICO a pymes y a autónomos con ayudas directas a las pymes y a los autónomos más afectados por la pandemia.

Nadia Calviño quiere evitar a toda costa que la crisis económica actual se convierta en una financiera, a imagen y semejanza a la de 2008. De ahí la quita que planea a la banca.

El Gobierno sólo destinará estos recursos públicos a salvar a las pymes que son solventes, pese a que ahora atraviesen por dificultades financieras por la actual crisis económica.

El Ejecutivo dejará caer a las pymes insolventes, con el fin de optimizar al máximos los recursos públicos y no emplearlos en empresas heridas de muerta y, por tanto, sin futuro.

LA RAZÓN
La Razón
España
01/03/21
Pr: Diaria
Tirada: 75.013
Dif: 51.585
Cod: 137417538
Pagina: 27
Secc: ECONOMÍA Valor: 31.678,85 € Area (cm2): 809,8 Ocupac: 93,43 % Doc: 2/2 Autor: Inmaculada González de Molina Num. Lec: 186000

EFE

LAS CIFRAS

14.000
millones de euros
es el máximo de la cuantía que Calviño baraja condonar a la banca en los créditos avalados por el ICO.

2.750
millones es el máximo que
Economía estudia destinar a ayudas directas de los 11.000 millones anunciados por Sánchez.

5.000
millones de euros en
ayudas directas se habilitarán entre el Gobierno de Sánchez y los Ejecutivos autonómicos.

El déficit se disparará hasta los 100.000 millones este año

I. G. de Molina-Madrid

Sólo dos meses después del inicio del ejercicio de 2021, las previsiones presupuestarias del Gobierno para este año ya han saltado por los aires. El nuevo paquete de ayudas por importe de 11.000 millones de euros, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles pasado en el pleno del Congreso de los Diputados, se traducirá directamente en más déficit público. Así, estas nuevas ayudas destinadas a reflotar a pequeñas y medianas empresas y a autónomos afectados por el coronavirus dispararán el déficit público previsto en los Presupuestos Generales el Estado de 2021 del 7,7% al 8,7% del PIB, lo que situará el desfase en presupuestario próximo a los 100.000 millones de euros al finalizar el ejercicio. En concreto, se saldará con 97.438 millones de euros, siempre y cuando no se incurra en un mayor gasto público o en un menor ingreso del estimado por el Ejecutivo central.

Las nuevas ayudas que prepara el Ejecutivo para rescatar a pymes y a autónomos aumentarán el gasto público

Los ingresos podrían disminuir si, al final, el Ejecutivo opta por condonar impuestos y cuotas sociales

El nuevo paquete de ayudas puede afectar a los gastos mediante las condonaciones de los créditos a las entidades financieras, avalados por el ICO, pero también puede provocar una merma de ingresos si, al final, se decide que las ayudas directas a pymes y a autónomos, que, en principio, serán a fondo perdido, se destinen a condonar el pago de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social, cuestión aún por decidir. En cualquier caso, sea por la vía de los ingresos o por la de los gastos, se traducirá en un incremento del desfase presupuestario, después de que en 2020 se desbocara por encima del 11% del PIB, cercano a los 125.000 millones de euros.

Pese a que las nuevas ayudas de Sánchez a las pymes y a los autónomos impactarán en el déficit público, no afectarán, en principio, a la previsión de deuda pública, según confirman a LA RAZÓN fuentes gubernamentales. Esta no afectación en la deuda se explica, según estas mismas fuentes, por una reprogramación realizada por el Tesoro Público en la emisión de deuda pública en 2020 por un importe inferior a 10.000 millones de euros de los inicialmente previsto, cuantía que coincide prácticamente con el montante de las nuevas ayudas. Por tanto, existe margen para refinanciar estas ayudas sin incurrir en deuda pública, que, por el momento, parece fuera de control, al situarse en el ejercicio pasado en el 117,1% del PIB, el mayor porcentaje registrado en los últimos cien años y que hipotecará el futuro de generaciones de españoles.

LA VANGUARDIA
La Vanguardia
España
01/03/21
Pr: Diaria
Tirada: 65.922
Dif: 50.776
Cod: 137415141
Pagina: 49
Secc: ECONOMÍA Valor: 31.124,78 € Area (cm2): 691,0 Ocupac: 69,94 % Doc: 1/1 Autor: REDACCIÓN Barcelona Num. Lec: 480000

Más de 150 asociaciones de empresas exigen el fin de los altercados

El manifiesto pide a las administraciones paz social para conservar el empleo

MANÉ ESPINOSA

Los manifestantes han causado destrozos como este en escaparates de tiendas del paseo de Gràcia

REDACCIÓN Barcelona

Más 150 asociaciones empresariales de Catalunya exigieron ayer a la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el resto de consistorios catalanes el fin de los desórdenes públicos ocasionados estos días a raíz de manifestaciones contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y la crisis económica y social que ha causado la covid.

"Estamos agotados. Exigimos que la Generalitat y los ayuntamientos ejerzan su autoridad democrática y sus responsabilidades sin complejos con el fin de recuperar la paz y la convivencia en nuestras calles. Ninguna causa justifica actitudes violentas. Para mantener la cohesión social y los puestos de trabajo es imprescindible poner fin a la violencia, la mejor aliada para destruir ocupación", apunta el manifiesto firmado por las patronales Foment, Pimec, Femcat, Cecot y asociaciones como el Círculo Ecuestre, la UFEC, RACC, Comertia, la Federación de la Hostelería de Catalunya, Foro Puente Aéreo, UPM, Barcelona Oberta, ADE, AEBALL, Federación Española de Agencias de Viaje y decenas de asociaciones más.

Los empresarios están muy preocupados por los altercados y la destrucción de bienes públicos y privados, como los que han sufrido locales comerciales que en alguna ocasión han llegado a ser saqueados por manifestantes. "Los actos vandálicos realizados por grupos radicales organizados deben ser erradicados y deben ser objeto de la más absoluta condena", exigen.

Las asociaciones empresariales también se muestran consternadas por la difusión internacional de las manifestaciones de estos días en la ciudad. "Las terribles imágenes perjudican gravemente la capacidad de Barcelona y de toda Catalunya para atraer turismo de calidad, talento e inversiones. Comprometen nuestro futuro colectivo".

Más allá de los altercados, el empresariado ya anunció el viernes la preparación de un gran acto reivindicativo bajo el lema *Ja n'hi ha prou! Centrem-nos en la recuperació* con el objetivo de exigir al Gobierno central y a la Generalitat el fin de sus divisiones y la focalización de los recursos en la salvación de las empresas que actualmente ven amenazada su supervivencia como consecuencia de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria y la escasez de ayudas públicas en comparación con las que reciben las compañías de otros países europeos. Los altercados vividos las últimas semanas en Barcelona han sido la gota que ha hecho colmar el vaso por todo el malestar acumulado de los últimos meses. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, cifró en 2 millones de euros los daños causados en ataques a comercios por los manifestantes.

Entre los firmantes están Foment, Pimec, Cecot, Femcat, Círculo Ecuestre, UFEC, RACC o Comertia

El primer encuentro de esta iniciativa se prepara para el próximo día 4 de marzo y está previsto que participen las mayores patronales catalanas, Foment del Treball y Pimec, así como otras asociaciones empresariales del mundo económico catalán como el Cercle d'Economia y la UFEC, Unió de Federacions Esportives de Catalunya. La intención de esta iniciativa es iniciar una "revuelta pacífica" del empresariado para defender la economía si no hay un nuevo gobierno en Catalunya fuerte y cohesionado.

De hecho, el manifiesto publicado ayer urgía a los partidos políticos a formar gobierno sin más dilaciones. "La crisis económica a la que nos enfrentamos es de enorme magnitud y no tiene precedentes en nuestra historia reciente. Los ciudadanos, trabajadores o empresarios no entenderían que la recuperación no estuviese en el centro de la acción de gobierno. No es el momento de las disputas políticas sino el de la cooperación, la responsabilidad y la lealtad institucional". Los empresarios piden que la Generalitat defienda la economía productiva, el empleo y el Estado de bienestar y que, dentro de esta estrategia, fije como prioridad la cohesión social y el mantenimiento del orden.

Los empresarios también piden al Gobierno central que instrumente y conceda de forma inmediata 50.000 millones de euros en ayudas directas a empresas, autónomos y sectores más afectados por la pandemia, siguiendo el ejemplo del resto de países de la Unión Europea.

Con el objetivo de hacer realidad sus peticiones, los empresarios proponen una negociación inmediata y la suscripción de un Pacto de País para la recuperación económica y social entre fuerzas políticas, administraciones públicas y las distintas entidades de la sociedad civil. El acuerdo, apuntan, debe ser lo más transversal y con el mayor consenso posible.●

LA VANGUARDIA
La Vanguardia
España
01/03/21
Pr: Diaria
Tirada: 65.922
Dif: 50.776
Cod: 137415089
Pagina: 51
Secc: CONTRAPORTADA Valor: 32.150,27 € Area (cm2): 729,5 Ocupac: 72,25 % Doc: 1/1 Autor: Lluís Amiguet Num. Lec: 480000

Víctor-M. Amela – Ima Sanchís – Lluís Amiguet

Joseph Stiglitz, Nobel de Economía; publica 'Reescribir las reglas de la economía europea'

¿Edad? He aprendido a confiar en mis ojos más que en las estadísticas. Estoy casado con Anya, de familia española. Biden hará que Google y Facebook paguen impuestos en España. La UE debe gastar más y más rápido para salir de la recesión; EE.UU. gasta el triple. Colaboro con Palau Macaya-Fundació La Caixa

"Reactivarán la economía dando dinero a los pobres, no a los ricos"

ÀLEX GARCIA

Quién gestiona mejor la salida de la recesión, EE.UU. o la UE?
La UE ha dado grandes pasos frente a esta pandemia para ser más eficiente; pero ahora debe gastar más y más rápido...

EE.UU. aplica ya tres billones de dólares en estímulos; la UE no llega ni a uno.
Tomar decisiones es comparar el riesgo de hacer algo y el de no hacerlo y entre los dos elegir el menor. Y ahora el riesgo mayor es hacer demasiado poco. Creo que EE.UU. con Biden está haciendo lo necesario y que, en cambio, la UE hace demasiado poco.

¿No teme que generar tanta liquidez de repente acabe disparando la inflación?
Es mucho más difícil luchar contra una recesión que contra la inflación. Por eso, lo más urgente ahora es asegurar que la economía de todos se recupera. Después, ya nos ocuparemos de la inflación, porque tenemos instrumentos eficaces para frenarla.

¿Cuáles?
Contra la inflación podemos subir los tipos de interés y podemos subir los impuestos a los más ricos, y en EE.UU. créame que hay mucho margen para subirlos.

Usted enseñó a Yellen y aún es su mentor...
Y aprendimos a generar crecimiento para después repartirlo. Cuando crezcamos será el momento de políticas de igualdad para que los impuestos, hoy demasiado bajos para los ricos, financien las mejoras en nuestra educación, tecnología, ciencia, infraestructuras...

¿Qué debería hacer ya la UE?
La UE ha dado grandes pasos frente a esta pandemia para ser más eficiente; pero, además de gastar más y más rápido, debería reformar sus estructuras y avanzar en su armonización para frenar el aumento de la desigualdad.

¿Cuáles? ¿Cómo?
El gran problema europeo es que la tributación está aún en las manos de cada uno de los estados miembros, que aprueban sus impuestos y los cobran. Y las multinacionales y los más ricos se aprovechan y van cambiando de un país a otro para pagar menos, y así no se recauda bastante.

¿Google, Facebook y otras tecnológicas no son claros ejemplos de elusión fiscal?
Lo que Apple y Google hicieron en la UE es inaceptable. Se domiciliaron en Irlanda para pagar menos y así ellos e Irlanda estaba robando al resto de la UE. Y, encima, esas gigantescas empresas creaban muy poco empleo y de poca calidad en los países donde ganaban mucho y no pagaban impuestos.

¿Cambiarán las cosas con Biden?
Sé que el presidente Biden trabaja ya para conseguir grandes acuerdos globales para que Google, Facebook y las demás tributen lo justo donde obtienen sus beneficios y no solo donde pueden pagar menos, como hacen ahora.

Piketty y otros piden la condonación de la deuda europea por la pandemia.
Si aprietas demasiado al acreedor, a menudo acabas recuperando menos de la deuda. En cambio, si pactas unas condiciones racionales de devolución, ganáis él y tú. Y hoy hay mecanismos financieros eficientes, como determinados *swaps* (contratos a futuro), para gestionar esa deuda. Así todos ganarían.

En el 2008 usted me dijo que la austeridad era suicida: hoy todos le dan la razón.
Pero durante décadas hemos sufrido ese fundamentalismo de mercado. Por fin, tras fracasar en la salida de la recesión del 2008 con sus medidas de austeridad, la UE se ha dado cuenta de que en una crisis apretar el cinturón a los países que ya están sufriendo en vez de ayudarles nos lleva a todos a la catástrofe.

Y hoy todo el mundo pide estímulos.
Porque desde el 2008 quedó demostrado que los mercados abandonados a su propia dinámica no funcionan y que la austeridad y la falta de inversión en lo público generan la ruina privada de la mayoría.

¿Cuándo será momento de atajar la desigualdad que ha aumentado en el 2020?
Cuando la prosperidad que generan los estímulos nos permita subir tipos e impuestos a los más ricos. Es entonces cuando, como pasaba antes de la pandemia en EE.UU, incluso trabajadores marginales tendrán empleo.

¿Hoy sí cree que el euro sobrevivirá?
En el 2010 le dije que temía que no superara la austeridad de entonces y ha sobrevivido, pero la buena noticia es que en esta recesión pandémica la UE sí ha acertado al dar ayudas en vez de créditos a los países en apuros.

¿Qué más pasos debe dar la UE?
La agenda común contra el cambio climático es estupenda, y espero un mecanismo para pagar la deuda de forma común mediante impuestos para toda la UE, digitales, empresariales, ambientales... Esta pandemia es una oportunidad.

¿Cómo nos tomará el pulso económico cuando vuelva a España?
Siempre miro las estadísticas de un país, pero creo más en lo que veo, y la clave de España es su altísima tasa de paro y, en especial, paro juvenil. Me fijaré si se nota en la calle.

¿La ultraderecha seguirá creciendo si Biden y la UE reducen la desigualdad?
No todo es economía en la vida: si crece la desigualdad, la tensión social también; pero de forma diversa en cada país. En EE.UU. es tensión racial; en España, territorial.

Lluís Amiguet

El pobre gasta más y mejor

Para reanimar una economía hay que dar dinero a quien menos tiene, porque lo gastará más, más cerca, más rápido y mejor que los que ya tienen mucho. Por eso, Stiglitz afirma que es más efectivo inyectar euros en las cuentas de los ciudadanos o no cobrar impuestos a las clases bajas y medias que hinchar la bolsa para los grandes inversores. Cuando las clases medias ya hayan relanzado el consumo y la economía será momento de subir tipos de interés e impuestos, que servirán para recuperar esos estímulos y seguir redistribuyendo empleo y prosperidad. Así lo va a hacer Joe Biden y es lo que aconseja a la UE el académico de la Racef Stiglitz. Ojalá nos den tanto dinero a cada europeo como lo recibirá cada estadounidense. Sabremos gastarlo.

Instituto de la Empresa Familiar

NOTICIAS DESTACADAS MEDIOS DIGITALES

Lunes, 1 de marzo de 2021

https://www.elindependiente.com/economia/2021/02/27/el-caos-burocratico-para-acceder-a-los-fondos-deja-en-vilo-a-las-pymes-espanolas/

El caos burocrático para acceder a los fondos deja en vilo a las pymes españolas

El Gobierno va a agilizar los plazos para la contratación pública pero ha creado una estructura en la administración para la gestión de los recursos que puede complicar el acceso de las pequeñas empresas

Olga Rodríguez

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha convertido en una suerte de plan Marshall que las empresas españolas esperan para pasar página de los estragos que ha causado la crisis del coronavirus. Financiado con fondos europeos, el plan tiene que dirigir a la economía española hacia una mayor digitalización, igualdad, sostenibilidad y cohesión social y territorial.

Los ejes del plan y su importancia están claros desde el principio. No obstante, su gestión preocupa al sector empresarial y a la oposición, que acusa al Gobierno de falta de transparencia. Moncloa se ha comprometido a agilizar los trámites de licitación pública para que los proyectos que se aprueben para formar parte del plan salgan adelante lo antes posible. Sin embargo, el Ejecutivo ha diseñado una serie de órganos encargados de gestionar en algún punto los fondos europeos.

El más relevante es la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y formada por los ministros, las vicepresidencias y los secretarios de estado de Hacienda, Presupuestos y Gastos, Derechos Sociales; así como la autoridad responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y el responsable del Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de Presidencia del Gobierno.

De esta Comisión depende el Comité técnico, que a su vez deberá dar el visto bueno de los Consorcios para la Ejecución del Plan. Además, el Ministerio de Hacienda estará en contacto con las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial, que a su vez, tendrá una comisión de coordinadores que será la encargada de preparar y dar seguimiento a las reuniones. El departamento que dirige María Jesús Montero también será el centro directivo responsable del plan de cara a las instituciones europeas es lo que se ha denominado autoridad responsable del Mecanismo.

En definitiva, una serie de grupos de trabajo que deberán dar seguimiento al plan del que todavía quedan muchas incógnitas por resolver.

Los PERTE, al Consejo de Ministros

Esta semana, el secretario general de Asuntos Económicos y G20 del gabinete de Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, explicó que la previsión es que las

licitaciones y convocatorias empiecen “a partir del segundo trimestre”. Antes, a lo largo del mes de marzo, el Ejecutivo debe crear -según el Real Decreto-ley 36/2020 […] para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- el Registro estatal de entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

Los PERTE serán las iniciativas público-privadas que se desarrollen financiadas por los fondos europeos con el objetivo de potenciar el crecimiento económico. De la Rocha detalló que se tratará de proyectos estratégicos e innovadores que sitúen a España en la «punta de lanza» de determinadas tecnologías y con un efecto tractor notorio, por lo que habrá un «número limitado» de iniciativas. Los PERTE deberán ser aprobados por el Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno se ha comprometido desde el primer momento en que los ministerios tendrían un papel destacado en la gestión de los fondos. De hecho, estos pueden crear foros de participación con el objetivo de “permitir el diálogo, contar con orientaciones o recomendaciones para el éxito en la consecución de los objetivos, favorecer la discusión y la generación de sinergias y favorecer la gobernanza”, según reza el Real Decreto.

El mismo texto legal otorga preferencia a estos proyectos y reduce a cinco días los plazos para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes, sin que quepa prórroga alguna, al tiempo que los plazos fijados para la tramitación del procedimiento abierto se reducirán a la mitad por exceso, salvo el plazo de presentación de proposiciones, que será de 15 días naturales contados.

En cuanto a la tramitación de subvenciones, se eliminan requisitos de informes y autorizaciones preceptivas, si bien para autorizar la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros será necesario acuerdo del Consejo de Ministros. Igualmente, se podrá efectuar el desembolso anticipado de los fondos hasta un límite máximo del 50% de la cantidad total a percibir en los expedientes de gasto que se tramiten para los que su normativa reguladora no permite o bien se limita el desembolso anticipado.

Sin ventanilla única

Aunque la idea inicial del Ejecutivo era la de crear una ventanilla única para la presentación de los proyectos, finalmente se ha optado porque haya tantas “ventanillas” como organismos licitadores de proyectos, según publicó *Cinco Días*. Así, aunque Moncloa centralizará toda la información en un portal, las iniciativas privadas deberán presentarse a través de los ministerios.

Todo este entramado burocrático dificulta que los fondos europeos que financiarán los PERTE lleguen a las pequeñas y medianas empresas, que son mayoría en el tejido productivo español, y que están menos acostumbradas a lidiar con trámites administrativos. Para tratar de acercar el Plan a las pymes, la CEOE, a través de la Oficina de Proyectos Europeos, desarrollará un sistema para avisar a las empresas, sean del tamaño que sean, de las convocatorias y licitaciones públicas, vinculadas a los fondos.

Con todo, fuentes empresariales consultadas por este periódico indican que les gustaría conocer “más detalles sobre la tramitación de los proyectos” y critican que “de momento, el diseño parece estar pensado para empresas del Ibex-35”.

Grandes empresas

El Real Decreto incluye que los pliegos de condiciones deberán tener en cuenta la “potenciación de las pymes” y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha insistido en varias ocasiones en la importancia de que “a los proyectos puedan acceder las pequeñas y medianas empresas para cumplir el objetivo de salida de la crisis derivada de la pandemia”. Sin embargo, teniendo en cuenta los ejes a los que se dirige el plan y el diseño de su gestión, los *pequeños* empresarios ven complicado acabar beneficiándose de los fondos.

A diferencia de las pymes, las grandes empresas ya dan por hecho que recibirán recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De hecho, varias compañías del Ibex ya han puesto cifras a proyectos que podrían salir adelante. Endesa ha propuesto planes al Gobierno por valor de 19.000 millones de euros. En el caso de Telefónica, ha nombrado a Marisa Urquía como responsable de gestionar los proyectos referentes a los fondos europeos.

Asesorar y gestionar

Mientras el Gobierno ultima el Plan que debe remitir a Bruselas, han surgido aliados de la gestión en muchos ámbitos. Uno de los primeros fue la banca, que se ofreció a elegir y distribuir los proyectos que reciban los fondos europeos. Además, las consultoras han abierto sus puertas a empresas que quieran optar a esos fondos.

Tal como publicó este periódico, Acento, la consultora fundada por José Blanco, ha firmado una alianza con la holandesa YGroup, para ofrecer asesoramiento a empresas que quieran acceder a los PERTE. También las *big four* han empezado a trabajar con empresas interesadas en estos proyectos.

El Fondo de Reconstrucción europeo incluye 140.000 millones de euros para España entre ayudas directas y créditos. De momento, el Plan presentado por el Gobierno hace referencia a las ayudas directas valoradas en 72.000 millones de euros, de las que el Ejecutivo ya ha adelantado 27.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado de este año.

https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/fondos-europeos-espana.html

La paradoja de España: esperando los fondos europeos mientras gasta sólo el 40%

La falta de ideas y personal especializado en las administraciones públicas amenaza con desperdiciar buena parte del dinero que llegará de la UE, como ha ocurrido en los últimos años

Leo Rama

España sólo ha gastado el 40% de los fondos europeos del periodo 2014-2020. Prácticamente, dos terceras partes del dinero proveniente de la Unión Europea no han sido aprovechadas. Está a la cola del continente en ejecución. Si bien las previsiones del Gobierno contemplan que el porcentaje aumente hasta el 70% gracias a una prórroga que se extenderá durante los tres próximos años, **estas cifras evidencian el enorme reto que tiene ante sí España, que ahora dispondrá de tres veces más dinero** procedente de la UE: ¿podrá aprovechar los 140.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia? Dependerá de la inventiva.

La **falta de proyectos planteados** es uno de los principales motivos por los que España arroja uno de los peores datos de ejecución de los fondos europeos. **"Ha habido relativamente pocas ideas en los últimos años"**, explica a *Vozpópuli* el economista y director de Coyuntura de Funcas, **Raymond Torres**. Según él, parece evidente cuáles serán los "proyectos tractores" de los que se encargarán las empresas más potentes de sectores como el ferroviario con el impulso de los ansiados corredores, el de las telecomunicaciones -"por ejemplo, Telefónica y la red 5G"- o el energético, con un cambio de paradigma que afianzará las renovables, como el llamado 'hidrógeno verde'.

La inversión en políticas ecologistas representa el 37% del total de los fondos, seguida de la digitalización, con un 33%... **Despoblación, sostenibilidad, moderización de la administración**... Son diversos los frentes. A falta de que se concrete la forma de reparto de los fondos, este experto es "incapaz de ver con claridad si hay proyectos suficientes" para asignar las partidas que ya están contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 más allá de esos grandes planes formulados por empresas privadas, que cuentan con la capacidad y los contactos para optar a ese dinero. **El auténtico reto es extender su efecto a las pymes.**

Facilitar los fondos europeos a las pymes

"Eso va ser uno de los grandes desafíos", apunta Torres, convencido de que el Gobierno tiene que apostar por "políticas horizontales" que democraticen el acceso a los fondos, corrijan las trabas burocráticas y permitan mejorar la competitividad real de las empresas: **"De lo contrario, vamos a aumentar la brecha entre las pymes y las grandes empresas"**. En otras palabras, este experto aboga -y asegura que así se está planteando-

por una suerte de ventanilla única, una suerte de ‘Amazon’ para dar un espaldarazo digital al pequeño negocio.

El experto economista Funcas aboga por **“organizar un verdadero mercado de servicios tecnológicos de calidad”** para las pymes: una plataforma que sea sostenida y regulada por el Estado y en la que participen los operadores privados que cumplan una serie de requisitos y estándares, los cuales harían de intermediarios. Así, **las pequeñas empresas contarían con un saldo que podrían invertir** en distintos aspectos, desde el asesoramiento básico hasta operaciones más complejas que permitan mejorar su productividad en un nuevo contexto por la pandemia.

De este modo, se recompensaría a las pymes, **facilitando el acceso a liquidez para mejorar su visibilidad en la web o acceder a nuevas tecnologías** que las hagan más competitivas en el cada más desarrollado comercio electrónico. Torres recuerda que “la parte digital es el segundo eje” de estos fondos europeos y una plataforma como la que propone permitiría hacer llegar el dinero de Europa a los estratos menos resilientes frente a la crisis económica, porque “va a ser complicado que pidan recursos” por la dificultad que entraña la solicitud y justificación de este tipo de subvenciones.

El papel crucial de las pequeñas administraciones

Pero no solo las empresas más pequeñas tienen problemas para acceder a los fondos europeos. **Las administraciones autonómicas, provinciales y locales tienen también un importante papel** ahora para plantear proyectos que puedan ser financiados con el dinero que llegue de Europa. Sin embargo, las administraciones más cercanas a los ciudadanos a menudo carecen de los medios suficientes para hacerse con esas partidas millonarias que permitirían desarrollar proyectos que en muchos casos podrían ser verdaderos revulsivos sobre el terreno.

Buena parte de **las instituciones públicas carecen de personal cualificado para optar a fondos europeos**. Por un lado, a complejidad de la burocracia para acceder a los mismos y, por otro, la falta de liquidez para poner el dinero por adelantado -que se suele pedir en este tipo de ayudas- hacen imposible a muchas administraciones acceder a estas vías de financiación que pueden marcar la diferencia, especialmente en aquellas corporaciones pequeñas e intermedias de la España más afectada por el fenómeno de la despoblación. Así, quedan en el mejor de los casos abocadas a contratar a consultoras que desconocen las necesidades reales de cada territorio.

"Un tsunami de dinero y responsabilidad"

Los fondos europeos son "un tsunami de dinero y responsabilidad". De este modo lo describe **la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, quien reconoce la preocupación de la Comisión Europea** por las condiciones de ejecución de los fondos en España porque "no tenía una ejecución tan fuerte como nos gustaría del periodo que termina ahora", si bien "en los últimos meses ha crecido mucho". De hecho, destaca que España no solo ha sido "muy rápida y muy eficaz" en usar la reasignación de fondos autorizada por Bruselas para hacer frente a la pandemia, sino que ha sido **"el país que más ha usado esta posibilidad de transferencia en toda Europa"**.

"España tiene todas las características para sacar el máximo partido de esta oportunidad histórica", decía Ferrara este domingo en una entrevista con la agencia Efe. Si todo va como está previsto, apuntaba, esos fondos empezarán a llegar el próximo verano. Es el objetivo de la actual presidencia portuguesa de la UE, que insta a los parlamentos nacionales a ratificar la decisión de recursos propios como tarde en abril próximo, algo que por el momento han hecho apenas media docena de estados miembros.

En otras palabras: **la Unión Espera espera reformas**. El plan que presente España tendrá que contemplar cambios de calado -en materia de pensiones o políticas de empleo- que compensen la generosidad de esos 140.000 millones, de los cuales casi 70.000 millones se desembolsarán como transferencias a fondo perdido y el resto podría solicitarlos en forma de préstamos. Ese es el requisito imprescindible para que la Comisión Europea pueda acudir a los mercados para conseguir financiación.

El Gobierno pretende que España sea el primer país que presente su plan de recuperación. Las negociaciones con la Comisión avanzan a buen ritmo. Tal y como informó este diario, Pedro Sánchez ha pedido celeridad a los actores implicados -empresas y administraciones- para **acelerar los proyectos**. El Ejecutivo está en conversación a todos los niveles para presentar en Europa esas ideas, unas necesidades que existían y paradójicamente no han sido abordadas hasta ahora, y resumidas en el plan bautizado como 'España puede'. **"Ya lo conseguimos en los años 90"**, asevera Raymond Torres.

"Como tantas otras veces, **la clave está en si habrá voluntad política para modernizar España o si jugaremos otra vez a hacernos trampas en el solitario**", concluía hace unos días en su columna de este periódico Enrique Feás, economista del Estado, resumiendo este punto sin retorno, este horizonte de sucesos que aún están por escribir: "No aprovechar los fondos que nos da la Unión Europea para reformar y modernizar España sería imperdonable. Y que nadie dude de una cosa: **esta pandemia va a marcar el futuro económico de los países** de la Unión Europea y sus ciudadanos en el siglo actual. Apostar por el futuro o tirarlo a la basura está enteramente nuestras manos". Sólo falta concreción.

https://www.elconfidencial.com/economia/2021-03-01/dudas-hogares-congela-consumo-agravan-crisis_2970952/

Optan por acumular ahorro

Las dudas de los hogares sobre la recuperación congelan el consumo y agravan la crisis

El inicio de año deja los peores datos de compras desde el confinamiento. El comercio y la hostelería ven agravada su situación y las dudas del proceso de vacunación no ayudan

Javier G. Jorrín

El inicio del año está dejando una debilidad económica inesperada. Las familias hicieron un importante esfuerzo durante la campaña navideña, lo que permitió una **recuperación asombrosa del consumo**. Sin embargo, tras las vacaciones, la situación se agravó rápidamente. Aunque el principal culpable de este deterioro fue el aumento del número de contagios, no fue el único. La campaña de vacunación rápidamente empezó a mostrar todos los problemas que enfrenta, desde la producción hasta la logística. Además, las restricciones impuestas por las comunidades autónomas multiplicaron los trabajadores en ERTE hasta alcanzar nuevamente **los 900.000 trabajadores.**

En este escenario, se produjo una **recaída de la confianza de los hogares**. Si bien a finales de diciembre esperaban una recuperación rápida a partir de la primavera, ahora ya temen que España vuelva a perder la temporada turística. Y esto supondrá un gravísimo golpe para la economía del país. Solo en el verano de 2020, la economía española perdió algo más de 27.000 millones de euros en ingresos procedentes del turismo internacional. El retraso en la campaña de vacunación amenaza con dejar otro verano de bajos ingresos en el sector, lo que significa centenares de miles de puestos de trabajo en riesgo, esto es, asalariados que hoy están en ERTE y que en el futuro podrían estar en el paro.

En este contexto, los datos de consumo de enero y febrero están siendo **mucho peores de lo esperado**. Aunque el INE todavía no ha publicado los datos oficiales del comercio minorista ni del consumo de las familias, ya existen numerosos indicadores de alta frecuencia que muestran la magnitud de la caída sufrida desde la segunda semana de enero.

El primero de ellos es el de las **ventas de las grandes empresas** en el mes de enero, dato que procede de las declaraciones mensuales a la Agencia Tributaria. Las ventas minoristas de la gran empresa se desplomaron un 18% en enero en comparación con el mismo mes de 2020. Se trata de la mayor caída registrada desde abril y la segunda peor de toda la pandemia. Este tipo de compañías tiene en el mes de enero uno de los picos de ventas del año gracias a la temporada de rebajas de invierno, pero este año ni siquiera los descuentos han conseguido movilizar el consumo.

Los hogares han optado por **acumular ahorro** hasta que la situación sanitaria mejore. Si el proceso de vacunación está avanzado ya para el verano, podrán aprovechar este colchón para las vacaciones. En el caso contrario —que el proceso de vacunación se retrase y no pueda celebrarse la temporada turística—, el riesgo de que la crisis genere efectos persistentes se multiplica. Así, si las cosas van mal, contarán con una reserva para afrontar ese escenario que cada día adquiere más posibilidades.

Los indicadores de confianza también muestran la vuelta del pesimismo ante los **reiterados problemas de la vacunación**. El mejor indicador de expectativas de las familias es el de la Comisión Europea. Si bien en diciembre mostró una intensa recuperación, en enero y febrero ha perdido casi todo el terreno ganado. El saldo de expectativas de crecimiento para los próximos 12 meses (optimistas menos pesimistas) sigue siendo negativo y, aunque no ha vuelto a los niveles del confinamiento, se sitúa en niveles históricamente bajos, en un -35%.

España se sitúa en el **grupo de países con mayor pesimismo**, un vagón que está compuesto por los países de sur de Europa, muy desindustrializados y altamente dependientes del turismo. Grecia ocupa el último lugar, con un saldo del -66%, y en situación similar se encuentran Francia, Italia o Chipre. Todos ellos están sufriendo una crisis más profunda y, además, ven que el próximo verano también está en riesgo.

La recaída del consumo se ha prolongado durante todo el mes de febrero, con datos muy negativos al inicio del mes y algo mejores hacia el final, cuando comenzó una **leve desescalada de las restricciones**. En este caso, los datos proceden de las compras con tarjetas de crédito, datos que incluyen tanto grandes empresas como pequeñas, pero que no contabilizan el consumo con dinero efectivo.

Según los registros de CaixaBank (primer operador del mercado nacional), las ventas de los establecimientos de restauración y ocio (no incluye al turismo) sufrieron un **desplome interanual superior al 40%** durante las últimas semanas de enero y el principio de febrero. Se trata de la mayor caída desde mediados de mayo, antes de entrar en la 'nueva normalidad'. Los datos fueron algo peores para el turismo nacional, con una caída de las ventas superior al 50% durante el mes de febrero. Y eso que se trata de plena temporada baja, esto es, que en febrero de 2019 tampoco hubo mucho turismo. Pero este año las cifras son mucho peores, ya que se ha perdido la mitad de la facturación.

También el comercio minorista (excluidos los bienes de primera necesidad) está en una situación dramática. A finales de enero y principios de febrero, la caída de la facturación **llegó a superar el 30%** respecto de las mismas semanas del año anterior. A partir de mediados de febrero, las cifras mejoraron con el levantamiento de las restricciones, pero, aun así, las ventas siguen lejos de los niveles del año anterior.

El **consumo por internet** no fue un alivio para el comercio. Durante la segunda ola del virus (meses de noviembre y diciembre), las ventas 'online' se dispararon con crecimientos que llegaron a superar el 20%. Muchas familias realizaron sus compras navideñas por este canal para evitar el riesgo de contagios, pero con el inicio de la 'cuesta de enero', volvió el ahorro y los datos empeoraron rápidamente.

En enero, las ventas por internet registradas con tarjetas y TPV de CaixaBank apenas crecieron un 9%. Y en febrero los datos empeoraron, sobre todo en los primeros días,

hasta que empezaron a mejorar las cifras de contagios. En las tres primeras semanas del mes, **las ventas apenas han crecido un 7%** respecto al mismo periodo del año anterior. Un balance muy pobre que no puede compensar el fuerte desplome del consumo presencial.

También han sufrido un fuerte desplome las retiradas de efectivo **en los cajeros automáticos**, dato que muestra que la caída del consumo es incluso superior a la que muestran las ventas con tarjetas. Según los registros de CaixaBank, los reintegros sufrieron un descenso del 22% en enero y del 21% en las tres primeras semanas de febrero. Son también los peores datos desde mayo, durante la desescalada, y confirman que el inicio de año está siendo dramático para el consumo.